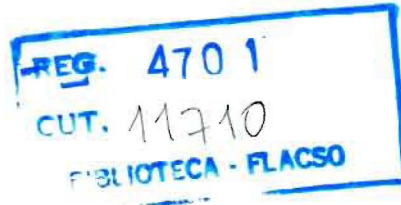
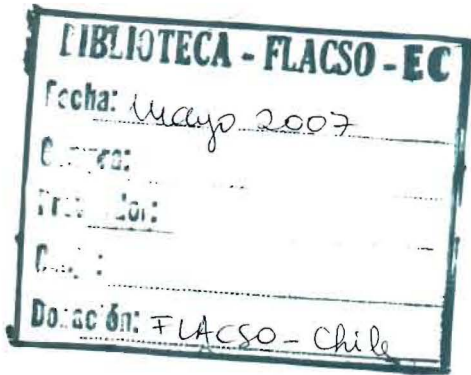


# Paz, crisis regional y política exterior de Estados Unidos

## Informe Regional: América Latina

FLACSO - Biblioteca

341,72  
F594P  
ej-2



© FLACSO, Claudio Fuentes. Nº 138.966

#### INFORME REGIONAL

Coordinador general:	Francisco Rojas Aravena
Coordinador Informe regional:	Claudio Fuentes S.
Asistentes:	David Álvarez Natalia Escobar Claudia Fuentes Carlos Vergara Andrés Villar
Diseño y producción:	Marcela Zamorano
Web master:	Paula Pardo

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de FLACSO ni de las instituciones a las cuales se encuentra vinculado.

Esta publicación es uno de los resultados de las actividades desarrolladas, en el ámbito de la investigación y la difusión, por FLACSO-Chile. Estas actividades se realizan con el apoyo de la Fundación Ford.

Ninguna parte de este documento, incluido el diseño de portada, puede ser reproducida, transmitida o almacenada de manera alguna ni por algún medio, ya sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin autorización de FLACSO.

# Índice

Presentación	5
I. El nuevo contexto de la seguridad internacional	7
II. América Latina, una región pacífica pero vulnerable	13
III. Crisis regionales y resolución de conflictos	15
IV. Sociedad civil y promoción de la paz en el hemisferio	21
V. Mirando hacia el futuro: sociedad civil, paz y crisis regional	29
Recuadros	
Recuadro 1. Protección de derechos civiles en Estados Unidos. El rol de las ONGs	9
Recuadro 2. Ayuda militar de Estados Unidos a América Latina	11
Recuadro 3. Experiencias de resolución multilateral de conflictos en América Latina	14
Recuadro 4. Colombia: tendencias de un conflicto regional	17
Recuadro 5. Guatemala: un país vulnerable	18
Recuadro 6. Haití y Bolivia: países con alta vulnerabilidad	20
Recuadro 7. Una experiencia exitosa de acción civil en temas de violencia urbana	28
Recuadro 8. Intervención de la Ministra de Defensa Michelle Bachelet	28
Recuadro 9. Grupos de Trabajo: síntesis de la discusión	32
Anexos	
Programa de la Conferencia	34
Participantes en la Conferencia	36
Documentos	39

# Presentación

El 28 y 29 de agosto del 2003, con el apoyo de la Fundación Ford, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile, organizó la Conferencia Internacional: *"Paz, Crisis Regional y Política Exterior de Estados Unidos"*, que reunió a más de 100 representantes de la sociedad civil, organizaciones multilaterales, gobiernos y académicos provenientes de 18 países de América y Europa. Se convocó especialmente a representantes de organizaciones de la sociedad civil del hemisferio con el propósito de discutir los alcances del nuevo contexto internacional, las tendencias recientes de la política exterior de EE.UU. y su potencial impacto en la forma como se resolverán futuros conflictos.

Los objetivos centrales del encuentro fueron evaluar el rol que tienen las instancias multilaterales en la resolución de controversias dado el actual contexto internacional; dar cuenta de los problemas y alternativas de resolución pacífica de conflictos en América Latina y el Caribe, y debatir opciones para el desarrollo de una agenda de paz en el hemisferio. En este marco, se pretendió evaluar y diagnosticar los efectos de la actual política exterior de EE.UU. La tendencia hacia la resolución de conflictos por la vía militar que se ha manifestado en el período reciente ha incrementado la incertidumbre sobre los efectos que podrían desencadenar estas aproximaciones en diferentes regiones. Es imprescindible desarrollar un debate informado sobre los cambios que se han producido en el mundo y en el hemisferio, analizando tanto las vulnerabilidades de la región como las oportunidades para la cooperación. La conferencia abrió un espacio para el intercambio de ideas y la discusión de las acciones que podrían desarrollar actores de la sociedad civil en la región vinculados a una agenda en pro de la paz.

Los organizadores de la conferencia establecieron una metodología de trabajo de tres etapas. En la primera, se solicitó a representantes de la sociedad civil responder a un cuestionario sobre materias específicas vinculadas con: (a) el papel de la acción multilateral en la resolución de conflictos; (b) las experiencias nacionales en la resolución pacífica de los conflictos, y (c) el rol que le cabe a la sociedad civil organizada en la promoción de una agenda en favor de la paz. Como resultado de esta etapa, se recibieron 26 trabajos que sirvieron de base para el debate que se efectuó en la fase siguiente. La segunda etapa implicó la realización de una Conferencia Internacional que combinó exposiciones de invitados especiales del hemisferio y Europa y la organización de tres grupos de trabajo en un día y medio de trabajo. A partir de esta discusión se generó una lista de recomendaciones de política y acciones posibles de ser operacionalizadas en el corto y mediano plazo.

Una tercera etapa consistió en la realización del informe que se presenta a continuación y que constituye un análisis prospectivo a partir de los temas que se abordaron en la reunión. Nuestro objetivo es disseminar este informe de la manera lo más extensiva posible con el fin de promover un debate amplio sobre el nuevo contexto internacional, los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que existen en la región, y el rol que le cabe a la

sociedad civil en la promoción de la resolución pacífica de los conflictos a nivel local, nacional e internacional.

A continuación se presentan los principales resultados de la reflexión que ocurrió en el transcurso del debate y en los trabajos escritos presentados durante la Conferencia. La responsabilidad de esta síntesis es plenamente asumida por los organizadores.

Los coordinadores de este trabajo agradecemos especialmente a cada una de las personas que participaron activamente en la presentación de documentos y en el debate de una serie de elementos que se procura reflejar en estas páginas. Esperamos que este material sirva para enriquecer los esfuerzos que se están llevando a cabo en otras regiones del mundo y que apuntan en la misma dirección. Consideramos de vital importancia la apertura de espacios para la reflexión, la coordinación de iniciativas y la promoción de una agenda de paz en el mundo. Tenemos la esperanza que este trabajo sea un modesto, pero significativo aporte en esa dirección.

Francisco Rojas Aravena  
Director FLACSO-Chile

Claudio Fuentes  
Coordinador del proyecto

## I. El nuevo contexto de la seguridad internacional

El inicio del nuevo milenio coincidió con una importante transformación de las relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad. Estos cambios se asocian primero, a una alteración en la estrategia de contención de Estados Unidos a partir del año 2000; segundo, al reconocimiento del terrorismo internacional como una amenaza global, y tercero, la explicitación de tensiones entre las principales potencias del mundo en la forma de abordar nuevos desafíos de seguridad internacional.

Es probable que estos tres fenómenos afecten al hemisferio de diversas formas, incluyendo el agravamiento de conflictos, la militarización de la solución de controversias, y el menor énfasis en la resolución negociada y multilateral de éstos.

### Estados Unidos. Nuevas tendencias de política exterior

Un primer hecho significativo es el cambio en las definiciones de política exterior por parte de Estados Unidos que se inició con la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca, y se aceleró a partir del atentado del 11 de septiembre de 2001.

Históricamente, la política exterior estadounidense se ha organizado de acuerdo a dos objetivos: por un lado, promover el bienestar económico y la seguridad de su población dentro y fuera del país; y por el otro, asegurar la defensa de sus intereses estratégicos. Finalizado el conflicto este-oeste, Estados Unidos agregó la promoción de la democracia como un eje prioritario en la medida en que se afirmó que democracia

y libre mercado eran dos fenómenos que se reforzaban mutuamente. Adicionalmente, el gobierno de Bill Clinton priorizó la cooperación con los principales centros de poder (Europa, Japón, China, Rusia) a fin de resolver las crisis económicas y de seguridad internacional.

El gobierno del presidente Bush redefinió algunos de los supuestos de la administración anterior. Esto ha tenido consecuencias no sólo para la política exterior, sino que también ha producido importantes transformaciones en el ámbito doméstico (ver Recuadro 1).

### Los desafíos del multilateralismo palabras de bienvenida a la conferencia

**José Miguel Insulza**, Vicepresidente de la República de Chile.

“Las transformaciones del sistema internacional de hoy día son tan importantes como los cambios de finales de los años ochenta con el advenimiento de la globalización. El ataque a las torres gemelas y a la capital estadounidense fue fundamental para la reconfiguración de la política internacional. Adicionalmente, vivimos un mundo donde los temas públicos globales adquieren cada vez mayor importancia en un contexto de alta desigualdad intra y extra nacional.”

“Es en este contexto que las instituciones multilaterales se deben potenciar. Chile, un país relativamente pequeño en términos de su población y mercado, se enfrenta al dilema que para mejorar sus condiciones de vida necesita insertarse en el mundo. Simplemente, el país no puede quedarse al margen de la realidad global.”

“Sin embargo, sabemos que el esquema de inserción en instancias multilaterales favorece a las grandes potencias. Si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tomó una resolución frente a la guerra en contra de Irak fue porque los países que lo componen no estaban dispuestos a dar su voto, situación que no había ocurrido antes al interior de la institución, lo que demuestra que el

*Continúa en la página siguiente*

sistema internacional se encuentra en una etapa de reestructuración. Así, la respuesta al dilema de cómo participar con la falta de poder es entonces integrarse, ampliar la globalización, participar con los recursos que se tengan.”

“Pero esta integración no debe ser sólo económica, también los países deben ser capaces de integrarse políticamente, de manera de crear regímenes internacionales con la posibilidad de no sólo contrarrestar la posición de las grandes potencias, sino de formular condiciones que permitan llevar a los países medianos a un sitio de importancia en el sistema internacional.”

**Augusto Varas Fernández**, Representante de la Fundación Ford para la Región Andina y Cono Sur.

“Las instituciones filantrópicas tienen una triple responsabilidad: ante los contribuyentes que pagan sus impuestos; ante los gobiernos que permiten las exenciones tributarias, y ante los donatarios que deben recibir las donaciones sobre bases objetivas para propósitos de bienestar social, no privados o de lucro. Asumiendo como premisa esta responsabilidad, hoy día observamos que uno de los principales bienes públicos amenazados en la región latinoamericana, es la paz. En una región donde aún existen aberrantes cifras de muertes producto de la violencia política, el abogar por el estado de derecho y el imperio del derecho internacional humanitario, aclarando las responsabilidades de todos los actores involucrados, constituye un deber imperioso del cual la Fundación Ford no se ha restado ni se restará.”

“Tal como lo indica Susan V. Berresford, presidenta de la Fundación Ford, ‘creemos que la mejor forma de enfrentar este desafío es promover la iniciativa de aquellos que viven más cercanos a los problemas; incentivar la colaboración entre las ONGs, el gobierno y el sector privado, y asegurar la participación en todos los niveles de la sociedad, de hombres y mujeres, de los diversos grupos y comunidades. De acuerdo a nuestra experiencia, estas actividades ayudan a construir el entendimiento mutuo, a desarrollar la excelencia y permiten a los pueblos mejorar sus vidas y comunidades’. Por estas razones, una de las prioridades que actualmente la Fundación Ford se ha fijado en la América Latina es la prevención y solución pacífica de los conflictos en la región. Sólo la acción mancomunada de políticos, empresarios, académicos, gobernantes, dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil, podrá acercarnos a la paz y asegurar que esta sea duradera.”

**Francisco Rojas Aravena**, Director de FLACSO-Chile

“La conferencia que nos convoca pretende analizar este nuevo contexto global, discutir el rol de los organismos multilaterales en la resolución de controversias, pero aún más importante, debatir cómo desde la sociedad civil se pueden imaginar estrategias para la promoción de una agenda en pro de la paz en el hemisferio. Hoy más que nunca el contexto internacional nos está afectando cada día en nuestras vidas.

“La intensificación de las fumigaciones en Colombia, ha incentivado el cultivo de coca en Bolivia y Perú, lo que seguramente incrementará el tráfico de estupefacientes en

Continúa en la página siguiente

Desde el punto de vista internacional, en el 2000, el gobierno de Bush adoptó una actitud más crítica respecto de China y Rusia, señalándolos como “competidores estratégicos” en vez de “aliados estratégicos” como se les había definido en el anterior gobierno demócrata. Adicionalmente, se decidió renunciar a algunos acuerdos internacionales vinculados a proliferación de armas y juzgamiento de oficiales por crímenes de lesa humanidad.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre contribuyeron a reforzar las definiciones estratégicas de política exterior ya indicadas, las que se hicieron explícitas en *La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos* (septiembre, 2002) y *La Estrategia Nacional para combatir el Terrorismo Global* (febrero, 2003).

La nueva estrategia de seguridad nacional definió tres amenazas frente a las cuales EE.UU. debe estar preparado: el terrorismo internacional, las armas de destrucción masiva, y la existencia de “rogue states” (“estados delincuentes”), que aspiran a amenazar el sistema internacional a través de la adquisición y uso de armas de destrucción masiva. Aunque pocos disputan la existencia y seriedad de aquellas amenazas, el problema se presenta cuando se analizan los medios y estrategias escogidos por EE.UU. para hacerles frente. Tres ejes definen sus opciones de política: una agenda de política exterior centrada en temas de seguridad, la promoción de coaliciones flexibles, y la promoción de acciones preventivas para hacer frente a tales amenazas.

**POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD.** El ataque del 11 de septiembre de 2001 reordenó las prioridades de la primera potencia del mundo, estableciéndose una agenda que colocó en el centro de sus preocupaciones los asuntos vinculados a la seguridad. Una de las principales tendencias que surgen de esta nueva jerarquización es el efecto que tiene en el condicionamiento de la ayuda



Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Este es sólo un ejemplo de la interdependencia compleja que vivimos en la actualidad en el continente. Nuestras investigaciones demuestran que los gobiernos de la región han tendido a reaccionar fragmentariamente a los nuevos desafíos que impone el nuevo contexto internacional. Hoy más que nunca se requieren acciones concertadas, coordinadas y proactivas. Se necesita un liderazgo claro de nuestros gobiernos promoviendo una agenda de cooperación en un hemisferio que tiene muchas experiencias de resolución pacífica de conflictos.”

“La sociedad civil puede y debe cumplir un rol fundamental tanto en el seguimiento de las acciones de sus gobiernos, como en la promoción de determinados temas centrales en el ámbito internacional. En el presente, se requiere de actores capaces de alertar a la ciudadanía, desarrollar propuestas imaginativas y promover soluciones a complejos problemas que enfrenta la región.”

económica y militar al apoyo que otorguen los países en desarrollo a los objetivos estratégicos de EE.UU. en el plano de la seguridad y en las cuestiones estratégicas.

A partir de esto surgen otros temores en los países en desarrollo. Estos se refieren a la mayor inclinación a resolver conflictos internacionales utilizando como primer y único método la vía militar, cuestión que reduciría el margen de maniobra de los estados para buscar soluciones no armadas a complejos problemas como el narcotráfico y hasta el propio terrorismo. La definición de la Casa Blanca respecto a que “con los terroristas no se negocia” colocaría, por ejemplo, en una seria disyuntiva al gobierno colombiano dado que una solución no negociada en dicho país parece imposible de llegar a materializarse en el corto plazo.

**COALICIONES FLEXIBLES VS. INSTITUCIONES MULTILATERALES.** La principal estrategia del gobierno de Bush para alcanzar sus objetivos de seguridad es mediante la construcción de coaliciones flexibles, esto es, alianzas *ad hoc* que le permitan dar alguna forma de legitimidad y consolidar sus políticas internacionales en el corto plazo, aunque tengan el rechazo de los principales actores e instituciones internacionales.

El gobierno de Bush ha enfatizado un liderazgo mundial de nuevo tipo. La construcción de alianzas no podría enfrentarse a través de los organismos tradicionales (llámese OTAN, o Naciones Unidas) sino que mediante alianzas que respondiesen de forma adecuada a los cambios en sus políticas y respuestas al mundo post 11 de septiembre de 2001.

**GUERRA PREVENTIVA.** La nueva estrategia de proyección de poder global de Estados Unidos sostiene que el concepto de contención funcionó bien en un mundo con dos superpotencias y que, en ese contexto, el equilibrio de poderes se mantenía en la medida en que ambas aseguraban la respuesta inmediata ante un ataque con armas de destrucción masiva. Sin embargo, a juicio de EE.UU. en este nuevo contexto los “*rogue states*” y los grupos terroristas están dispuestos a utilizar cualquier medio a su alcance para afectar el sistema internacional, incluso dañando poblaciones civiles y yendo contra los conceptos fundamentales de una guerra tradicional.

### Recuadro 1 Protección de derechos civiles en Estados Unidos. El rol de las ONGs

A dos años de los atentados terroristas a Estados Unidos, las medidas adoptadas por la administración Bush han privilegiado la seguridad nacional por sobre la protección de las libertades fundamentales de las personas y sus derechos civiles, tal como lo demuestra la Ley Patriota, aprobada por el Congreso de este país poco después del 11 de septiembre de 2001. Según la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), esta ley ha generado al menos cuatro consecuencias en detrimento de los derechos civiles en Estados Unidos:

**a) Aumento en la cantidad de procedimientos secretos.** A pocos días del ataque se detuvo a más de 1.200 personas, principalmente inmigrantes con antecedentes étnicos árabes o sudasiáticos. El Departamento de Justicia se negó a identificar a los detenidos y decidió que todas las audiencias de deportación se realizarían a puertas cerradas. Muchos inmigrantes fueron encarcelados durante meses sin que se les acusara formalmente de nada ni se les diera acceso a abogados. La amplia mayoría de los detenidos no tenía conexión con el terrorismo.

*Continúa en la página siguiente*



**b) Límites al derecho a la privacidad.** Existen escasas limitaciones al tipo y cantidad de información que el FBI puede reunir, incluyendo registros financieros, historia clínica, recibos de hoteles, etc. Además, el gobierno ha puesto en marcha una serie de programas para acumular información sobre los norteamericanos.

**c) Debilitamiento del debido proceso.** El gobierno de Estados Unidos ha infringido las reglas del debido proceso al detener a individuos que califica de “combatientes enemigos”. Esto incluye a ciudadanos norteamericanos arrestados y mantenidos en detención por tiempo indeterminado, sin ser enjuiciados ni tener acceso a un abogado. Por otra parte, hay más de 680 personas no estadounidenses detenidas en la base naval de Guantánamo, acusados de participar en actividades terroristas internacionales. Estados Unidos no ha levantado cargos contra ellos ni les ha reconocido la condición de prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra.

**d) Erosión del equilibrio de poderes.** La administración Bush ha intentado limitar el control por parte de los poderes legislativo y judicial. Los esfuerzos por impedir la revisión judicial de los actos de la administración pública y aumentar las facultades del ejecutivo en una serie de ámbitos, son justificados por parte del gobierno sobre la base de la seguridad nacional.

Las principales organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, y fundamentalmente la ACLU, como la más influyente organización en defensa de las libertades civiles y los derechos de este país, han desarrollado una importante labor en términos de oponerse a aquellas medidas que atenten los derechos civiles de sus ciudadanos.

En materia judicial, la ACLU ha presentado demandas en contra de la práctica gubernamental de celebrar audiencias secretas de deportación, logrando favorables dictámenes en algunos casos. Asimismo, desarrollaron una importante labor de difusión y campaña educativa, que incluye la organización de foros y asambleas públicas, y la utilización de los medios de comunicación para transmitir un mensaje que esta organización ha definido como “seguridad con libertad.”

Como consecuencia de esta campaña, 152 comunidades de 27 estados de EE.UU. han dictado resoluciones locales en apoyo al mensaje de seguridad y libertad. Además, las organizaciones miembros de la ACLU enviaron una serie de cartas al Congreso protestando frente a las medidas que atentan contra los derechos de las personas. Uno de los efectos de la estrategia de la ACLU fue la negativa del Congreso de Estados Unidos –a principios de este año– para financiar el Programa de Conocimiento Total de la información instrumentado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Dado que el riesgo de esperar es más alto que el de un ataque, la nueva estrategia de EE.UU. sostiene que se requieren medidas anticipatorias para defenderse de una potencial agresión. La idea del ataque preventivo se funda en que no se debe permitir a los enemigos dar el primer golpe. Se sostiene que dichas acciones estarán sujetas a una evaluación de caso por caso. Con el objetivo de apoyar una decisión de cuándo actuar, los lineamientos de la nueva estrategia incluyen: incrementar las capacidades de inteligencia coordinando acciones con los aliados, y transformar las fuerzas armadas para responder oportuna y prontamente a las amenazas que se presenten en diversos escenarios del planeta: “Mientras mayor sea la amenaza -sostiene la estrategia de seguridad nacional- mayor es el riesgo de inacción y más apremiante el llamado anticipatorio a la acción para defendernos nosotros mismos aun si la incertidumbre permanece, tanto en el tiempo y lugar del ataque enemigo (...) Estados Unidos actuará preventivamente si es necesario”.

Esta nueva orientación tiene importantes consecuencias para el sistema internacional. Primero, la doctrina de ataques preventivos cuestiona conceptos básicos del derecho internacional. Esta no solamente cambia reglas del juego establecidas en Naciones Unidas, sino que puede tener graves efectos sobre la población civil, además de incrementar la tensión global. Segundo, esta doctrina consolida la visión unilateralista de Estados Unidos y lo conduce a un mayor aislamiento. Tercero, la nueva doctrina no establece un diseño de orden o legalidad a ser construida o reafirmada. Una mirada unilateral que reafirma el accionar preventivo y ofensivo tenderá a desestabilizar el sistema internacional con graves consecuencias para todos los Estados, en especial, para los más débiles. Finalmente, esta estrategia se cristaliza como una opción permanente y único instrumento de acción política internacional.

## Terrorismo: Una amenaza global

Uno de los principales efectos de los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 fue el reconocimiento internacional del terrorismo como un problema de escala global. La magnitud del atentado y la incapacidad de la principal potencia de prevenirlo han obligado a los países a reformular una serie de cuestiones referidas al estudio de las causas y mecanismos de prevención de atentados de esta naturaleza.

Si bien el terrorismo internacional ha existido por décadas, este atentado demostró la necesidad de plantearse cómo enfrentar a actores que se organizan fuera de las estructuras tradicionales del Estado, que han adquirido capacidades de destrucción que son letales, que actúan en forma encubierta y convencidos de llegar hasta las últimas consecuencias y que se preparan para atacar objetivos civiles y militares.

Esto impone a la comunidad internacional la necesidad de coordinar información, políticas de prevención y solución pacífica de conflictos. Lo anterior también supone un consenso básico sobre las reglas del juego que deben guiar la acción de los estados en el control de este flagelo. Enfrentar el terrorismo internacional es ciertamente un serio dilema por cuanto requiere altos niveles de coordinación y consenso pero no todos los países están dispuestos a aceptar la imposición de ciertas formas de encarar el problema, particularmente en un mundo unipolar. La experiencia pos 11 de septiembre demuestra que no es fácil establecer un consenso sobre las formas más adecuadas para prevenir ataques terroristas.

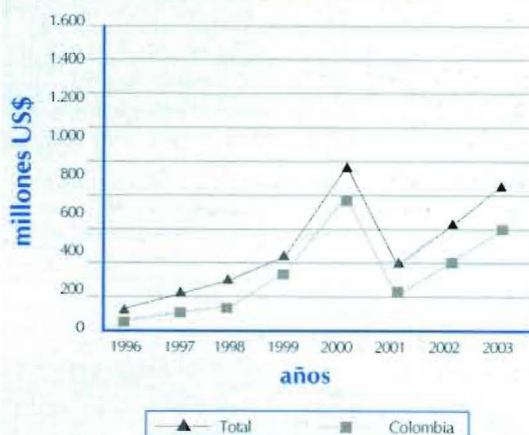
## Multilateralismo puesto a prueba

Un tercer elemento que surgió con particular notoriedad luego de los atentados en contra de Estados Unidos fue el debate respecto de la eficiencia de las

### Recuadro 2 Ayuda militar de Estados Unidos a América Latina

Estados Unidos ha ido aumentando progresivamente su ayuda militar y policial a los países de América Latina. A partir de 1996 se observa una tendencia creciente a la cooperación en material militar y policial, con la excepción de 2001 cuando se produce una baja considerable. En todo caso, en los últimos años las cifras tienden a marcar un acelerado incremento, y se espera que para el 2004, Estados Unidos aporte a esta región una cifra superior a los mil millones de dólares, principalmente a Colombia, que se lleva gran parte del presupuesto total asignado. Dicho aumento se explica a partir de la implementación del Plan Colombia. Se estima que de cerca de los novecientos millones de dólares que se aportarán en el 2003 para el total de la región, seiscientos millones son para este país. Es decir, Colombia representa 2/3 de la ayuda global a la región.

### Ayuda militar de Estados Unidos a América Latina, 1996-2003



Fuente: Latin American Working Group Education Fund. Paint by Numbers, August 2003.

organizaciones multilaterales (por ejemplo, Naciones Unidas) para hacer frente a nuevas amenazas, y la estructura de decisiones de dichas instancias que no da cuenta del actual balance de poder mundial.

**EFICIENCIA INSTITUCIONAL.** Una primera parte del debate se vincula a la eficiencia de las organizaciones internacionales para responder a situaciones de una manera rápida y eficaz. Según algunos analistas, se requiere rediseñar, modernizar y reformular algunas organizaciones como Naciones Unidas -a nivel global- y la Organización de Estados Americanos (OEA) -a nivel hemisférico- para responder a un contexto internacional más dinámico, cambiante y en donde las amenazas a la estabilidad provienen de lugares imprevisibles.

Se sostiene que estas organizaciones internacionales han generado altos grados de burocracia, distanciándose de la realidad de los conflictos. Así, se requeriría su desburocratización y una nueva focalización de sus prioridades.

Son precisamente estos problemas de eficiencia los que han llevado a la Asamblea General de la ONU a buscar mecanismos para mejorar la capacidad de respuesta multilateral frente a las crisis de seguridad internacional. El debate se ha manifestado en intentos de mejorar la capacidad de coordinación entre distintas entidades multilaterales, y de fortalecer el poder del Secretario General de Naciones Unidas para tomar ciertas decisiones. Un panel especial de la organización está debatiendo formas de mejorar su eficiencia, las que se presentarán a la Asamblea General del 2004.

**BALANCE DE PODER Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.** Sin embargo, el problema de la eficiencia está íntimamente vinculado con las relaciones de poder al interior de los organismos multilaterales, y en especial en el seno de Naciones Unidas. La composición y mecanismo de resolución del Consejo de Seguridad refleja la distribución de poderes propias del inicio de la Guerra Fría.

Más de medio siglo después de la creación de Naciones Unidas, el mundo ha experimentado profundos cambios. Estados Unidos es la principal potencia militar y económica y tiene la capacidad, y en algunos casos la voluntad, de actuar fuera del esquema de Naciones Unidas. Adicionalmente, el proceso de interdependencia económica provoca que los problemas de seguridad internacional ya no sean sólo materia de preocupación y deliberación de los países más desarrollados sino que también de los países en vías de desarrollo. Así, uno de los temas recurrentes en los debates sobre seguridad global alude a la necesidad que en la composición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se incorporen nuevos miembros, como también se modifique el sistema de decisiones para hacerla más operativo. Con la excepción de China, los restantes miembros del Consejo de Seguridad representan al 8% de la población mundial.

El peor de los escenarios en la actual coyuntura global es una comunidad internacional que no reacciona oportunamente frente a las crisis internacionales, instituciones internacionales que son sobrepasadas por conflictos de poder entre las grandes potencias, y estados poderosos que violan principios básicos de convivencia y respeto del derecho internacional y que además no reciben sanción alguna por parte del sistema internacional.

## II. América Latina, una región pacífica pero vulnerable

En América Latina, las tensiones interestatales son escasas y, cuando éstas han ocurrido han tendido a ser resueltas en forma no violenta. No obstante, cabe hacer notar que a inicios del siglo XXI se mantienen 16 diferendos interestatales no resueltos y que en los años noventa se usó la fuerza militar en 17 oportunidades, llegándose solamente en una ocasión a una situación de guerra (Ecuador-Perú).

Adicionalmente, la experiencia reciente demuestra que en América Latina y el Caribe ha existido cierta capacidad mediadora y de mínima concertación, la que se ha manifestado en situaciones de crisis de gobernabilidad democrática (Paraguay 1994, Bolivia 2003), e inter-estatales (conflicto Ecuador-Perú 1995). Instancias menos formales como "grupos de apoyo" o el Grupo de Río han demostrado ser canales eficientes para la búsqueda de consensos a nivel regional. Lo anterior ha generado un "multilateralismo complejo", esto es, una serie de espacios de negociación informal entre los países que operan a un ritmo distinto de las instancias más tradicionales e institucionalizadas como es la OEA (ver Recuadro 3).

No obstante, como se observará más adelante, en la región subsisten conflictos de larga data como el conflicto en Colombia, que tienen implicancias para toda la región.

### Principales vulnerabilidades

A partir de comienzos de la década de los ochenta se dio inicio al ciclo más extenso de democratización que ha conocido la historia de la región. Sin embargo, aún subsisten serios problemas de desarrollo político, social y económico que la hacen una región vulnerable. Las principales vulnerabilidades de la región son:

a) **INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DÉBILES.** Pese a que prácticamente la totalidad de los países de la región tiene gobiernos electos, en algunos casos la calidad de las instituciones democráticas está en serio entredicho. Por lo general, se observan inaceptables niveles de corrupción, bajos niveles de transparencia en asuntos de interés público y un bajo respeto por los derechos esenciales de las personas. De acuerdo con estándares internacionales, menos de cinco países de América Latina y el Caribe alcanzan la caracterización de democracias donde las libertades civiles son plenamente respetadas.

b) **CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES.** Además de la existencia de instituciones débiles, también se observa que instituciones como los partidos políticos y el Congreso carecen de legitimidad frente a la sociedad como intermediadores de las demandas sociales. La crisis de representatividad de dichas instituciones tiende a favorecer el surgimiento de populismos y gobiernos que terminan mostrando muy bajos niveles de apoyo ciudadano.

c) **CRECIENTES NIVELES DE POBREZA.** Un hecho significativo en la región es que después de casi dos décadas de aplicación de reformas económicas estructurales de liberalización de los mercados aún no se ha resuelto el problema de la pobreza. Mientras en 1980 el 40% de la población vivía bajo la línea de pobreza, hoy dicho porcentaje se eleva al 43% (más de 220 millones de personas). En el mismo período la indigencia se ha mantenido prácticamente inalterada (20% de la población latinoamericana en extrema pobreza). Nueve países tienen niveles de pobreza superiores al 50%: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú.

### Recuadro 3 Experiencias de resolución multilateral de conflictos en América Latina

#### Grupo Contadora

En mayo de 1983 se constituyó el Grupo de Contadora, integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, cuyo principal objetivo fue plantear una propuesta latinoamericana de solución a los problemas de América Latina con especial referencia a los conflictos político-militares en Centroamérica. Dos de sus principales logros fueron prevenir una intervención militar de las potencias en dicha región y la elaboración del Acta de Contadora, que estableció normas de convivencia en la región centroamericana afectada por crisis económicas, polarización e intervención. Posteriormente se incorporan Argentina, Brasil, Chile y Perú, estableciéndose así el denominado Grupo de los Ocho, que más tarde constituyó, con la adición de Bolivia, Paraguay, Uruguay, más un representante de Centroamérica y uno del Caribe inglés, el conocido Grupo de Río.

#### Grupo de Río

Este Grupo se encuentra hoy integrado por México, todos los países de Centro y Sudamérica, República Dominicana, y un país que representa al Caribe anglófono. Sus líderes se reúnen anualmente desde 1987 para abordar asuntos regionales e internacionales, y a menudo sus posiciones han servido como fuentes de alerta temprana. Así sucedió, por ejemplo, cuando los Mandatarios del Grupo reunidos en Costa Rica para celebrar su décima sexta Cumbre se pronunciaron con dureza ante los acontecimientos que paralelamente ocurrían en Venezuela, donde un golpe de Estado contra el Presidente Constitucional, Hugo Chávez, lo mantuvo separado de su cargo por unas horas entre el 11 y el 12 de abril del 2002.

#### El Salvador y el Grupo de Amigos del Secretario General

La cruenta guerra civil en este país centroamericano puso este conflicto en el ámbito de acción de las Naciones Unidas. Cuando la confrontación entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Gobierno de El Salvador se agravaba, el entonces Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, convocó a Colombia, España, México y Venezuela a integrar el Grupo de Amigos y auxiliarlo en el logro de una mediación exitosa. Después de varios años y arduo trabajo, el Grupo de Amigos del Secretario General consiguió que las partes se comprometieran con los Acuerdos de Paz que fueron signados en el Castillo de Chapultepec, el 16 de enero de 1992. Naciones Unidas desplegó una operación de mantenimiento de la paz, la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL).

#### Guatemala y el Grupo de Amigos del Proceso de Paz

Este Grupo se constituyó en 1993 y contó con la participación de Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y Venezuela. A diferencia de lo ocurrido en El Salvador, el Grupo de Amigos del Proceso de Paz de Guatemala nunca pretendió constituirse en instancia negociadora. Su trabajo al lado de la ONU y de las partes en contienda fue posible justamente por esa connotación. De esta forma, una vez tendidos los puentes con el apoyo del Grupo, la representación del Secretario General de la ONU pudo asumir su relevante papel mediador. Finalmente, el 29 de diciembre de 1996 se rubricó en la ciudad de Guatemala el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG). Naciones Unidas desplegó una fuerza de paz, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).

#### d) CRECIENTES GRADOS DE DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA.

América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta lo que afecta seriamente sus posibilidades de estabilidad y desarrollo. Primero, la concentración de poder económico en pocas manos inhibe políticas redistributivas en la medida en que los sectores más aventajados de la sociedad no están dispuestos a sacrificar parte de sus ganancias. Segundo, como la capacidad de recaudación de impuestos es baja, los sectores más afectados por la falta de acceso a servicios básicos del Estado (educación, salud, beneficios sociales) son los más pobres. Así, se produce un círculo vicioso mediante el cual los pobres perpetúan su condición de pobreza y los más adinerados cuentan con acceso a servicios privados de mejor calidad. Más aún, la brecha social entre ricos y pobres tiende a acrecentarse, generando altos niveles de conflictividad social.

e) **DESINTEGRACIÓN SOCIAL.** Altos niveles de pobreza unido a la debilidad de las instituciones democráticas afectan seriamente la integración social de sectores tradicionalmente excluidos y que sufren altos niveles de discriminación. Los sectores particularmente vulnerables en América Latina y el Caribe son los grupos étnicos, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, ancianos, e inmigrantes.

f) **VIOLENCIA Y CRIMEN URBANO.** Como resultado de lo anterior, se observan altos índices de violencia y crimen urbano en las principales ciudades de cada país, lo que se ha asociado con altos niveles de consumo de droga, tráfico de armas livianas y actividades ilegales. En muchas ciudades latinoamericanas se ha producido un fenómeno de creación de ghettos, espacios urbanos controlados por narcotraficantes y en donde el Estado enfrenta serias dificultades para mantener ahí el estado de derecho.

En síntesis, América Latina muestra una tradición de resolución de conflictos interestatales en forma pacífica. Desde el punto de vista nacional se observan crecientes tensiones sociales producto de las desigualdades económicas y la debilidad de instituciones por lo general regionales para responder a estos conflictos internos.

### III. Crisis regionales y resolución de conflictos

En la actualidad, existen tres focos de conflictividad en la región:

● **CONFLICTO LIGADO A LA SITUACIÓN COLOMBIANA (REGIÓN ANDINA).** Colombia vive una situación de violencia interna que se ha extendido por más de cuatro décadas y que combina conflictos sociales y políticos históricos con el más reciente desarrollo de cultivos de coca. Se trata de un complejo conflicto que incluye demandas de campesinos históricamente postergadas, el contexto de la guerra fría, la influencia de la revolución cubana, la emergencia de grupos guerrilleros en los años sesenta, la articulación de fuerzas de autodefensa (paramilitares) por parte de algunos grupos de poder internos y, más recientemente, la aparición del fenómeno del narcotráfico. Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela se han visto crecientemente afectados en sus fronteras a partir de la expansión de dicho conflicto.

Adicionalmente, la política de fumigaciones aplicada en Colombia en los últimos cinco años ha reducido de manera significativa el número de hectáreas plantadas de coca, pero al mismo tiempo ha incrementado las presiones para un aumento de la producción en Bolivia y Perú. En el 2002, mientras en Colombia se redujo el cultivo de coca en un 45%, en Bolivia se incrementó en un 23% y en Perú en un 8%.

● **CONFLICTOS DERIVADOS DE ALTOS NIVELES DE POBREZA ESTRUCTURAL.** En la región hay países en que se advierten altos niveles de pobreza estructural, que superan el 50% de la población y que se han mantenido alrededor de esas cifras durante décadas (y en algunos casos siglos) sin ser resueltos. Considerando el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los siete países más vulnerables de la región son, en ese orden: Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Paraguay. Entre los factores comunes a éstos se advierte la presencia en un alto porcentaje de pueblos nativos, la precariedad de las instituciones políticas democráticas y el escaso sustento democrático en la historia de dichos países.

● **CONFLICTOS SOCIO-POLÍTICOS EN PAÍSES CON NIVELES MEDIOS DE DESARROLLO.** Argentina y Venezuela son dos casos de países que muestran niveles medios de desarrollo pero donde se advierte un deterioro de las instituciones democráticas que se manifiesta en altos niveles de fragmentación y crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales, inaceptables niveles de corrupción y un rápido incremento de los niveles de pobreza en la última década.

## Los países más pobres de América Latina y el Caribe

Estadísticas socioeconómicas

País	Ranking Índice de Desarrollo Humano	Pobreza (2001) %	Esperanza de vida al nacer (2001) %	Tasa de alfabetización adultos (2001) %	PIB per cápita (2001)
Haití	150	s.i.	49,1	50,8	1.860
Nicaragua	121	67,4	69,1	66,8	2.450
Guatemala	119	60,4	65,3	69,2	4.400
Honduras	115	79,1	68,8	75,6	2.830
Bolivia	114	61,2	63,3	86,0	2.300
El Salvador	105	49,9	70,4	79,2	5.260
Ecuador	97	60,2	70,5	91,8	3.280
Paraguay	84	S.i.	70,5	93,5	3.840

Fuente: Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas 2003. Para niveles de pobreza ver Panorama Social de América Latina (CEPAL) 2001-2002.

S.i.: sin información

El análisis comparativo de las situaciones de las crisis y conflictos permite advertir tres riesgos latentes:

### 1.- Respuesta preferentemente militar al conflicto colombiano y en situaciones ligadas al comercio de drogas

El paquete de ayuda estadounidense a Colombia aprobado a fines de los años noventa contemplaba un fuerte componente militar. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la estrategia utilizada por el gobierno colombiano y apoyada por EE.UU. combina la erradicación de los cultivos de coca, la intensificación de la ofensiva militar contra la guerrilla y el incremento de la prohibición de drogas.

Lo anterior se ha traducido en un aumento sistemático de la violencia que se evidencia en el incremento del número de atentados terroristas, muertes de civiles y secuestros. Mientras en 1996 se produjeron 1.608 secuestros, en 2002 la cifra bordeaba los tres mil. La cantidad de víctimas debido al conflicto se duplicó entre

1996-1998 y 2000-2002. Adicionalmente, hubo un aumento sistemático del número de atentados terroristas en el período 1996-2002 (ver Recuadro 4).

La erradicación del cultivo de coca en Colombia provocó una disminución de cerca de 50 mil hectáreas cosechadas entre 1999 y 2002. Sin embargo, las reducciones en Colombia son equivalentes al aumento en la producción de coca en Bolivia y Perú, lo que expande el problema del narcotráfico y crea tensiones en países donde aparentemente se habían observado avances en el uso de cultivos alternativos. En otros términos, las presiones de erradicación de la coca hacen que el mercado de producción de la plantase desplace hacia otros países dentro y fuera de la región.

El agravamiento del conflicto militar lleva aparejado un "efecto espiral" que considera el aumento del tráfico de armas, municiones, precursores químicos, contrabando de mercancías y lavado de activos. El incremento en la circulación de armas livianas y pesadas contribuye a exacerbar el uso de medios violentos para la resolución de conflictos sociales.

La política de EE.UU. en materia de narcotráfico tiende a promover una resolución del mismo por la vía militar. A partir de septiembre del 2001, se reforzó aquella concepción al vincular directamente el tráfico de drogas y las actividades terroristas a escala mundial. En la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se hace una advertencia explícita sobre la necesidad de combatir la interdependencia entre el tráfico de drogas y los grupos armados ilegales. En octubre del 2001, el gobierno estadounidense incluyó a los grupos paramilitares colombianos (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la categoría de organizaciones terroristas. Lo anterior tuvo una importante implicancia burocrática en dicho país, ya que abrió la posibilidad de destinar nuevos fondos de la lucha antiterrorista para el caso colombiano. A partir de octubre del 2002 se levantaron las restricciones que prohibían usar dichos fondos para la protección de la infraestructura petrolera y para combatir a los grupos armados no estatales en Colombia.

En otras subregiones como Centroamérica, y particularmente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, a partir del 2000 se observa una creciente tendencia de centrar su agenda de política exterior con EE.UU. en materias de seguridad. No sólo se han firmado acuerdos de libre comercio sino que paralelamente se han establecido compromisos para el establecimiento de patrullajes conjuntos entre EE.UU. y los países centroamericanos para el control del terrorismo, migración ilegal hacia EE.UU. y narcotráfico en los corredores marítimos. Adicionalmente, se han firmado convenios entre el Departamento de Defensa y las fuerzas armadas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para aumentar sus niveles de coordinación institucional, ampliar programas de capacitación, actualizar sus equipos y mejorar su capacidad para combatir el terrorismo.

#### Recuadro 4 Colombia: tendencias de un conflicto regional

Durante la última década se ha producido una escalada en las acciones terroristas en Colombia, se han incrementado los niveles de violencia y el conflicto se ha expandido a países vecinos. En Colombia ocurre la mayor cantidad de secuestros en el mundo, y más del 50% son adjudicados a las FARC y el ELN. Las masacres o acciones homicidas recaen en la acción de los grupos autodefensas y guerrilleros. Producto de la industria del narcotráfico mueren anualmente unas 3.000 personas. Once mil niños soldados combaten en grupos armados, de los cuales el 80% está en las FARC y el ELN y el 20% restante en AUC. El 84,78% de las infracciones al derecho internacional humanitario son cometidas por las organizaciones subversivas, el 13,39% por los grupos autodefensas y el 1,98% por la fuerza pública.

#### Atentados terroristas en Colombia, 1996-2002



Otra forma de analizar la escalada de violencia en Colombia es el número de secuestros, que ha experimentado un brusco y constante aumento hasta el 2000, para después estabilizarse en cerca de 3 mil por año.

#### Secuestros en Colombia



Fuente: Dirección de Policía Judicial e Investigación. Departamento Nacional de Planificación. República de Colombia. 2003. [www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)



## 2.- Uso de la fuerza en conflictos internos

Un segundo riesgo en la región se vincula con la tendencia de los gobiernos democráticos de utilizar cada vez con más frecuencia mecanismos de fuerza para resolver conflictos sociales internos. Como promedio, en América Latina y el Caribe el 43% de la población viven bajo la línea de pobreza. El incremento del crimen, la delincuencia y el auge de tensiones sociales provocan un escenario particularmente conflictivo y frente a los cuales las autoridades en el gobierno tienden a utilizar mecanismos legales como estados de emergencia y de sitio para controlar dichos conflictos.

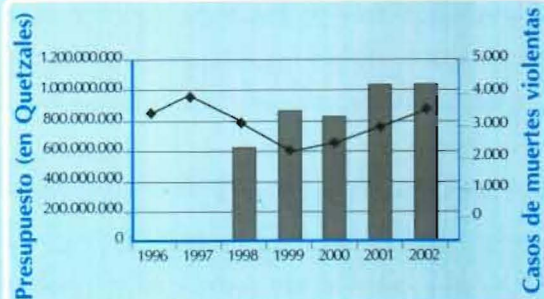
La búsqueda de soluciones al tema es compleja pues existen una serie de incentivos favorables a respuestas represivas. Primero, en muchos países la opinión pública se muestra inclinada a favorecer soluciones de "mano dura" para acabar con el problema de la delincuencia, criminalidad y los conflictos sociales. En segundo lugar, las autoridades democráticas se muestran receptivas a aplicar soluciones de alta visibilidad pública como son la aplicación de estados de emergencia, la ampliación de poderes de la policía para controlar conflictos sociales y el incremento de recursos para los organismos de seguridad, medidas percibidas como una "solución" inmediata al problema por parte de la ciudadanía. Finalmente, en la mayoría de los países de la región los mecanismos de control del funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad son prácticamente inexistentes. Así, mientras el gobierno requiere de fuerzas policiales para controlar el orden público, las autoridades civiles no cuentan con todos los instrumentos legales, las capacidades técnicas y, en ciertas ocasiones, la voluntad política para saber si las acciones de la policía se ajustan al estado de derecho.

### Recuadro 5 Guatemala: un país vulnerable

Casi ocho años se han cumplido desde que el Gobierno de Guatemala y la guerrilla firmaran los acuerdos de paz que pusieron fin a más de 35 años de gobiernos autoritarios. A partir de diciembre de 1996, el pacto permitió la elección de un presidente civil y la instauración de un sistema que hasta la fecha no ha sido capaz de responder las demandas sociales por mayor igualdad, transparencia, justicia y democracia.

En el ámbito de la seguridad, la firma de la paz significó un esquema completamente nuevo para unas Fuerzas Armadas que tradicionalmente contaron con una amplia gama de prerrogativas e independencia. La creación de la Policía Nacional Civil supuso no sólo un paso hacia la democratización sino una mayor seguridad que en la práctica está lejos de ser alcanzada. Sólo en el período del actual presidente Alfonso Portillo se han registrado más de 12.500 muertes violentas, cifra superior a las 10.333 que se produjeron en todo el período 1996-2000 bajo la presidencia de Álvaro Arzú.

### Guatemala: presupuesto PNC y muertes violentas



Fuente: Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)

A pesar que la creación de la Policía Civil ha reducido la labor militar en materias de seguridad interior, el mayor presupuesto no ha significado una reducción de la inseguridad. Casi el 80% del presupuesto se destina al pago de sueldos de los agentes y la falta de insumos y materiales básicos como la bencina para los automóviles policiales es evidente al interior de los cuarteles.

La necesidad insatisfecha de alcanzar justicia ante los actos de violencia ha propagado la práctica de linchamientos populares espontáneos y planificados, hechos de extrema violencia que en muchas ocasiones son propiciados por los mismos agentes policiales y que cuestionan seriamente la gobernabilidad. Según Amnistía Internacional, un 97% de los casos de linchamientos no han sido llevados a la justicia. Entre 1996 y 2001 se contabilizaron un total de 738 víctimas, de las cuales cerca de 200 resultaron con la muerte del afectado (Minugua, *Crónicas de Minugua*, No 37, 2001).

Continúa en la página siguiente

La falta de voluntad de las autoridades por sancionar a quienes cometen delitos y violaciones a los derechos humanos aumenta la sensación de inseguridad en un país que requiere mejorar sustantivamente la calidad de vida de sus ciudadanos y cumplir con las metas establecidas en los acuerdos de paz.

Un caso ilustrativo de esta situación es Argentina. A partir de comienzos de los años noventa los organismos de derechos humanos comenzaron una campaña sistemática para denunciar constantes abusos por parte de la policía. Se han documentado miles de casos de uso abusivo de la fuerza, escándalos de corrupción, “gatillo fácil”, uso de recursos institucionales con fines ilegales, participación de la policía en redes de narcotráfico, venta de autos ilegales, y secuestros. Lo anterior produjo serios intentos del gobierno de transformar la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires a mediados de la década procesos que se vieron truncados por las resistencias institucionales de la propia policía, de sectores políticos y la crisis económica posterior.

Pese a que la opinión pública evalúa negativamente a la policía, cuando a esas mismas personas se les pregunta si le darían más poderes a las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia y la violencia, cerca del 50% responde afirmativamente. Los esfuerzos de distintos gobiernos por reformar a la policía han sido infructuosos principalmente por las propias resistencias de las instituciones policiales y de los grupos de poder en el sistema político.

De esta forma, los procesos de democratización no implicaron una automática adaptación de las instituciones armadas y las fuerzas de orden a una nueva realidad donde debiera primar el estado de derecho. Una cultura de la violencia permea a las instituciones en muchos casos, incluyendo a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití y Venezuela, entre otros (ver recuadros 5 y 6).

### 3.- Soluciones extraconstitucionales a crisis de legitimidad

Otro de los fenómenos que se han transformado en una práctica habitual en la región es la búsqueda de soluciones extraconstitucionales a crisis de legitimidad de gobiernos democráticos. En comparación con décadas pasadas, se ha producido un importante y favorable cambio referido a la ausencia de golpes de estado encabezados por las fuerzas armadas. En las agudas crisis sociopolíticas que han enfrentado países como Argentina (2001), Brasil (1992), Ecuador (1997), Guatemala (1997), Paraguay (1994-1995), Perú (1992, 2000) y Venezuela (1992, 2002), el resultado fue la solución de dichos conflictos en el marco de estándares democráticos.

Tres factores podrían explicar esta nueva situación en la región: primero, la existencia de una comunidad de países democráticos en el hemisferio que han presionado por el mantenimiento de los sistemas democráticos. A esto se une una serie de acuerdos y compromisos internacionales de protección de la democracia. Segundo, la crisis de legitimidad de las propias fuerzas armadas en varios de los países del hemisferio. Finalmente, la ausencia de grandes disputas ideológicas entre las elites dirigentes en los respectivos países, lo que desincentiva la instrumentalización de las fuerzas armadas para fines particulares.

Si bien la resolución de crisis evitando el establecimiento de regímenes militares es un hecho positivo, uno de los factores negativos de esta nueva situación ha sido la consistente deslegitimación de los procedimientos democráticos para resolver conflictos internos, lo que indica un debilitamiento de las instituciones que sustentan dicho régimen político en la región. Las crisis de gobernabilidad tienden a ser resueltas con la renuncia de presidentes, la abolición de cons-

tituciones y la promulgación de nuevas reglas del juego, las que a su vez son cuestionadas si es que no cumplen con las expectativas de algunos sectores de la sociedad. Así, la inestabilidad de los gobiernos afecta la confianza de los y las ciudadanas en la democracia, tornando rutinarias las soluciones no constitucionales que deslegitiman las acciones políticas.

### Recuadro 6 Haití y Bolivia: países con alta vulnerabilidad

**Haití** es el país más pobre de América Latina y el Caribe. De sus 7,5 millones de habitantes, más del 80% se encuentra bajo la línea de pobreza y según datos de la FAO unos 3,8 millones de habitantes pasan hambre diariamente. La constante inestabilidad política y social del país ha contribuido a profundizar la crisis humanitaria que vive Haití desde hace varias décadas. La expectativa de vida al nacer no supera los 52 años y anualmente mueren alrededor de 30.000 personas a consecuencia del SIDA. El analfabetismo e índice de desarrollo humano sitúan a Haití al nivel de los países más pobres del planeta.

En el pasado, la profunda inestabilidad política generó gran cantidad de emigrantes ilegales, principalmente hacia Estados Unidos y existe el temor que esta situación se repita provocando un serio problema a la seguridad norteamericana. A diferencia de lo que sucede con los balseiros cubanos que tienen derecho a asilo al llegar a Estados Unidos, los haitianos son detenidos y repatriados a su origen.

A estas estadísticas se suman los problemas generados por el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y piratería de productos que generan un alto nivel de inseguridad en la población. Con todo, las posibilidades de más inestabilidad social constituyen una amenaza cierta para la región, sobre todo para su vecino, República Dominicana. Se ha generado una “democracia electoral autoritaria” con violaciones a los derechos humanos y políticos y fraudes electorales. Las amenazas a la gobernabilidad, la extrema pobreza, la marginalidad, la inestabilidad política, las enfermedades y el analfabetismo, entre muchos otros problemas deberían situar a Haití al tope de las prioridades de los organismos internacionales con miras a proteger los derechos humanos de una población que lleva muchos años padeciendo el olvido y la miseria, particularmente después de la salida de Aristide del poder en Febrero de 2004.

**Bolivia** es el país más pobre de Sudamérica. Seis de cada diez bolivianos viven entre la pobreza y la pobreza extrema, con un ingreso promedio inferior a dos dólares diarios. A nivel rural, nueve de cada diez campesinos son pobres o indigentes. El 60% de los poco más de 8 millones de bolivianos son indígenas, que en su mayoría viven en terribles condiciones sociales en el campo o en las zonas suburbanas. A aquella realidad, se agrega una economía frágil. Bolivia lleva cuatro años de bajo crecimiento con una expansión del PIB de apenas 2% en 2002. La crisis política y social se ha traducido en una fuga de capitales, que junto con un negativo desempeño exportador, empeoró el déficit de la cuenta corriente y de la balanza de pagos. A comienzos de 2003, el déficit fiscal era del 8.5% y el déficit comercial de los últimos años ha fluctuado entre US\$ 300 y US\$ 500 millones.

Desde el punto de vista político-institucional, Bolivia también enfrenta serios problemas. Tras una disputada elección con Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada asumió la presidencia de Bolivia en agosto de 2002. El escenario era de tal incertidumbre que luego de haber obtenido una mayoría relativa en la elección presidencial (22%), sólo las negociaciones y alianzas políticas permitieron, finalmente, su ratificación en el Congreso. Desde un comienzo, Sánchez de Lozada dependió de una frágil coalición para enfrentar a una fuerte oposición. De acuerdo a estándares internacionales, Bolivia ha descendido en los índices de corrupción del lugar 71 en el año 2000 al lugar 106 el 2003. El 17 de Octubre del 2003 renunció el presidente Sánchez de Lozada, después de amplias movilizaciones sociales. El nuevo presidente, el ex vice-presidente Carlos Mesa, definió su gestión como un gobierno de transición y se ha planteado tres objetivos, que sin embargo dependen del establecimiento de una amplia concertación social: la instalación de una Asamblea Constituyente, la revisión de la Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a un referéndum para definir una política de exportación de gas natural.

## IV. Sociedad civil y promoción de la paz en el hemisferio

### Roles de la sociedad civil organizada

La sociedad civil organizada puede desempeñar un papel significativo en la promoción de la paz en el hemisferio y en la resolución de los conflictos de manera pacífica. Esta puede involucrarse en tres áreas de actividades.

a) **PROMOCIÓN.** Una primera dimensión se refiere a la promoción de una cultura de paz y tolerancia en la resolución de conflictos. Estas actividades por lo general son encabezadas por organizaciones de base, o vinculadas a Iglesias, e involucran técnicas de resolución de conflictos a nivel local e incluso nacional en forma pacífica. La promoción de una cultura de paz también implica educación, actividades de difusión en comunidades locales y entre las redes transnacionales que promueven el respeto a los derechos humanos.

b) **SEGUIMIENTO.** Un segundo núcleo de actividades se refiere al rol que cumplen las organizaciones de la sociedad civil en países específicos o a nivel hemisférico realizando un seguimiento de las acciones de los gobiernos en materia de protección de los derechos humanos, apego irrestricto al derecho nacional e internacional y cumplimiento de acuerdos alcanzados. Ejemplos importantes de entidades observadoras a nivel internacional son: Human Rights Watch, the Washington Office on Latin America, the Latin American Working Group Education Fund, Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS-Argentina), Viva Río (Brasil), Instituto de

Defensa Legal (Perú), etc. Por lo general, las acciones de seguimiento implican: (a) documentar los casos; (b) sistematización de información relevante vinculada a conflictos sociales, y la transferencia y comercio de armas; (c) análisis en las tendencias de abusos de poder, y (d) seguimiento de la legislación nacional e internacional. Un elemento consustancial al seguimiento de esta actividad es su carácter público, para lo que se requiere el desarrollo de mecanismos de difusión de los seguimientos realizados. La información recopilada es útil sólo en la medida en que permite alertar a las autoridades nacionales e internacionales y al conjunto de la sociedad respecto del comportamiento de las autoridades de los gobiernos.

c) **IMPLEMENTACIÓN.** Un tercer núcleo de actividades se refiere al trabajo que puede realizar la sociedad civil en la puesta en marcha de ciertas políticas de Estado. Uno de los casos más emblemáticos en la región es el papel que cumplió una gran cantidad de organizaciones de base y activistas en la implementación de las políticas de pacificación en Centroamérica luego de décadas de guerra civil.

### Nuevo escenario internacional y sociedad civil

La acción de la sociedad civil en la prevención de conflictos y en la promoción de la paz está mediada por: (a) el creciente papel que asume ésta en un nuevo marco social, (b) la naturaleza diversa del problema, y (c) los distintos niveles en que el problema se manifiesta.

a) **AUMENTO DE DEMANDAS.** En el actual escenario internacional y regional -según lo descrito en este informe- se incrementan las presiones sobre la sociedad civil organizada para actuar y ejercer influencia ante gobiernos y organismos internacionales. Ello ocurre por cuatro razones. Primero, en la mayoría de los países de América Latina los partidos políticos tradicionales sufren de una alta crisis de representatividad. Dado que los partidos políticos no son percibidos por la sociedad como canales adecuados para hacer llegar sus demandas sociales a la autoridad, los organismos de la sociedad civil adquieren un protagonismo inédito. Un caso paradigmático ha sido Perú, donde luego de la crisis del gobierno de Fujimori las instituciones más respetadas han sido precisamente las organizaciones de la sociedad civil.

Segundo, en algunos casos los propios gobiernos han estimulado la participación de la sociedad civil organizada dado que ello les confiere más legitimidad. Lo anterior ha generado un flujo constante de personal desde organizaciones no gubernamentales hacia el campo de la acción pública.

Tercero, al estar los problemas internos cada vez más interrelacionados con la política estadounidense, en algunos países del hemisferio se produce una mayor articulación entre las organizaciones de la sociedad civil con organismos hemisféricos e internacionales. La lucha contra el narcotráfico es un ejemplo de esta situación. Por tratarse de un conflicto que involucra a EE.UU., las acciones de la sociedad civil organizada adquieren mayor relevancia e impacto cuando involucran a coaliciones o redes de organizaciones. Esto ha aumentado la legitimidad de las acciones de la sociedad civil transnacional, lo que a su vez incrementa las demandas por soluciones integrales con la participación de tales redes en la resolución de conflictos.

Cuarto, desde el mundo académico, fundaciones, agencias de cooperación e instituciones de financiamiento internacional se ha estimulado el potenciamiento de la sociedad civil organizada como eje central de la consolidación democrática. Lo anterior implica un reconocimiento a la labor de miles de activistas en el hemisferio, pero al mismo tiempo significa una mayor demanda hacia dichas organizaciones en relación al control y seguimiento de las acciones de interés público.

b) **NATURALEZA DIVERSA DEL PROBLEMA.** La promoción de la paz tiene diversas dimensiones o facetas que muchas veces van entrelazadas, aunque los actores sociales en un determinado país no siempre perciben aquellas vinculaciones. Una de las dimensiones más evidentes es la promoción de la paz en situaciones de conflicto, donde el caso colombiano es el más evidente actualmente en la región. Ahí es clara la relación entre las políticas de las grandes potencias, el apoyo militar para cumplir ciertos objetivos, la escalada del conflicto y las consecuencias que está teniendo en la población civil.

Una segunda dimensión es en regiones donde no hay un conflicto armado pero existen signos de mayores niveles de uso de la fuerza militar para resolver problemas sociales. En Centroamérica se han producido presiones por parte de EE.UU. para responder militarmente a problemas como el tráfico de drogas, inmigración y delincuencia internacional. Si bien no se ha dado un conflicto armado, se incrementan las presiones políticas para un mayor uso de la fuerza en la contención de problemas que ciertamente requieren respuestas multisectoriales y de la concertación de los países del hemisferio. En una región donde como promedio el nivel de pobreza supera el 50% de la población y en donde existe una proporción de un arma de fuego por cada 26 habitantes, existe un alto riesgo de una escalada de violencia social.

Otra faceta de la promoción de la paz en la región se vincula a estallidos sociales como el recientemente ocurrido en Bolivia, donde los factores desencadenantes del conflicto social y político son más complejos. En la emergencia de aquel conflicto se superpusieron intereses sectoriales, decisiones gubernamentales vinculadas al uso de recursos naturales, demandas indígenas históricamente postergadas, y la presión de EE.UU. para establecer una política más agresiva de fumigaciones de los cultivos de coca.

Finalmente, otra dimensión de la promoción de la paz se articula en torno a problemas tales como la delincuencia e inseguridad en grandes centros urbanos. En diversas ciudades del continente como el Gran Buenos Aires, Lima, Santiago o Río de Janeiro se han establecido verdaderos “feudos” en poblaciones o *favelas* que son controladas por narcotraficantes y en donde las autoridades dejan de ejercer el control de aquellos espacios, al menos transitoriamente. En Río de Janeiro se produjo una situación extrema a principios de los años noventa cuando verdaderos ejércitos de civiles controlaban y se confrontaban en espacios de las *favelas*. Lo anterior, sin duda alude a un conflicto local que va en directa relación con problemas de pobreza estructural, incapacidad del Estado de responder y solucionar problemas sociales y de control del orden público, etc. Sin embargo, también tiene una expresión internacional referida, por ejemplo, al tráfico y comercialización de drogas así como de armas ilegales. Oxfam Internacional, IANSA (International Action Network on Small Arms) y Amnistía Internacional han lanzado recientemente una campaña por el control del tráfico de armas en el mundo a partir de la constatación que existe una relación estrecha entre la producción de armas livianas en países de-

sarrollados (Austria, EE.UU., Gran Bretaña) y su comercialización en países en vías de desarrollo.

De esta forma, la sociedad civil organizada está respondiendo a distintas dimensiones del problema de la promoción de la paz, en algunos casos enfrentando situaciones que directamente dicen relación con la pacificación de un conflicto ya desencadenado, en otros casos en relación con la prevención de una escalada militar, y en otros, con cuestiones vinculadas a la violencia urbana en un ámbito más local.

**c) NIVELES DE ACCIÓN.** Una tercera característica es que la promoción de la paz puede darse en distintos niveles, partiendo desde un trabajo focalizado en el ámbito local (el trabajo de promoción de la paz en una comunidad), pasando por una labor más general en el ámbito nacional, y terminando en una dimensión de carácter transnacional. Aquellos niveles tienden a interactuar cada vez con mayor fluidez gracias a los avances tecnológicos de las comunicaciones.

### Dificultades de la acción colectiva

Desde hace tiempo se ha reconocido que uno de los principales desafíos para los movimientos sociales y organizaciones que abarcan una multiplicidad de miembros es su problema de acción colectiva, esto es, cómo coordinar una variedad de intereses, objetivos y agendas. La sociedad civil en América Latina y el Caribe no escapan a aquella realidad y enfrentan varios problemas para hacer efectiva una mayor influencia en el ámbito de la promoción de la paz y la pacífica resolución de conflictos.

**HETEROGENEIDAD EN LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN.** Los niveles de organización y capacidades de la sociedad civil en el continente son diversos. Existen experiencias organizativas de alta complejidad en, por

ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia e incluso Bolivia, pero mayor debilidad en países como Chile, Ecuador, Honduras y Perú. Desde el punto de vista de las organizaciones transnacionales que apoyan el trabajo en la región, la mayor parte de ellas se concentra en aquellos países más sensibles; en la actualidad, Colombia, Guatemala y Venezuela.

Uno de los casos recientes de coordinación compleja de acciones por parte de la sociedad civil es el Foro Social Mundial que tiene su sede en Porto Alegre, Brasil. A partir del 2000 se congregan cada año cientos de organizaciones y activistas en torno a ejes temáticos variados que incluyen, entre otros, democracia, desarrollo sustentable, medio ambiente, educación, libre comercio, tráfico de drogas, sociedad civil, contra-hegemonía, cultura, igualdad, recursos globales, diversidad, guerra y paz.

Este foro ha creado un efecto cascada dado que han surgido foros temáticos subregionales y nacionales como: Asia, Europa, la Panamazonía, Mediterráneo, Argentina, Colombia, España, Palestina, Portugal, Québec, Suiza, Venezuela y el Foro mundial de Educación.

Mientras Brasil se ha convertido en un foco de alto activismo en torno a problemas globales como la promoción de la paz, en otros países aquellos niveles de organización son difícilmente alcanzables.

**HETEROGENEIDAD EN LAS AGENDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.** Otro de los problemas que enfrenta la sociedad civil en la región es la heterogeneidad de sus agendas. Así, no existe una sociedad civil que en forma articulada demande la resolución pacífica de controversias internas o internacionales. Lo que existe es una serie de grupos que se organizan en torno a ciertos ejes temáticos específicos, y que en ciertos momentos o coyunturas (el

inicio de la guerra contra Irak, por ejemplo) alcanzan algunos niveles de coordinación mayor.

En Perú, por ejemplo, se dan distintos niveles de organización en torno a tres ejes temáticos significativos: una coalición que articula a las organizaciones de derechos humanos que ha centrado su trabajo en la búsqueda de la verdad y reconciliación como forma de superar la época de violencia ocurrida en dicho país en el pasado reciente; una coalición de organizaciones ambientalistas que ha cobrado mayor vitalidad a partir de la existencia de proyectos de inversión sobre la explotación de recursos naturales en el Perú; y una coalición de veeduría ciudadana que se ha focalizado en el tema de transparencia, acceso a la información y calidad de las comunicaciones.

Esta heterogeneidad de las agendas y, por tanto, de la focalización de las acciones de la sociedad civil, es algo común a toda sociedad. Dado que existe una gama amplia de problemas, las organizaciones tienden a focalizar su trabajo en responder a aquellas demandas inmediatas.

**SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA COMO REFERENTE SOCIAL.** La debilidad de los partidos políticos y la crisis de representatividad de las instituciones tradicionales que antes canalizaban las demandas ciudadanas aumentan la importancia de la sociedad civil, constituyéndose en muchos casos en referentes sociales. Esto ha implicado que muchas veces las organizaciones no gubernamentales asuman tareas y funciones más allá de su específico rol de promoción, seguimiento y participación en la implementación de ciertas políticas específicas. De ser actores que luchan por ciertas reivindicaciones a veces pasan a cumplir tareas en el proceso político mismo actuando como mediadores ante un eventual vacío de poder.

**LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA NO ES NECESARIAMENTE "NEUTRA".** Otro de los problemas es que la experiencia del trabajo colectivo muestra que no siempre las organizaciones de la sociedad civil son percibidas como "neutrales" en el proceso político. Por ejemplo, en el caso colombiano, las organizaciones de la sociedad civil que demandan una resolución pacífica de conflictos tienen distintas características y a veces, presentan importantes controversias entre ellas. En algunas regiones de dicho país, la Iglesia Católica aparece como abanderada de la sociedad civil, mientras en otras regiones las organizaciones no gubernamentales y de base aparecen más cercanas a partidos no tradicionales y a grupos armados. Aquellas organizaciones con mayores o menores dificultades han avanzado en el establecimiento de redes como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y Colombia Va, entre otras.

La relación entre la "sociedad civil" y los partidos políticos es también problemática. En algunos casos, la constitución de redes de organizaciones de base se vincula directa o indirectamente con determinadas agendas incentivadas por actores políticos que quieren alcanzar sectores sociales que de otro modo no sería posible acceder. En otros casos, aquellos sectores que no se sienten representados por los partidos políticos del gobierno de turno a nivel regional o nacional se consideran así mismos como representantes de una sociedad civil excluida.

**LA ARTICULACIÓN TRANSNACIONAL NO SIEMPRE ES SENCILLA.** Mientras en algunas coyunturas específicas el trabajo de organizaciones de la sociedad civil a nivel local y transnacional es particularmente fructífero, esto no siempre es la regla.

En el caso de la guerra de Irak, se produjo una coordinación simultánea de diversas organizaciones y en diferentes países del continente. En ese caso existía un claro referente (la intervención de EE.UU. en Irak) que rápidamente movilizó a grupos heterogéneos de organizaciones en torno a un objetivo: la promoción de la paz.

Sin embargo, en el trabajo cotidiano de las organizaciones aquella coordinación no es sencilla. Por una parte, las organizaciones locales están abocadas a resolver problemas contingentes vinculados a sus propias agendas con, generalmente, escasos recursos y sobrecarga de trabajo. Por otra parte, las organizaciones transnacionales tienen demandas y agendas específicas (información sobre casos particulares, recopilación de información, promoción de agendas globales) que a veces no es fácil de incorporar en el trabajo cotidiano de las organizaciones locales.

### Experiencias destacables

En la región han existido algunas experiencias destacables de articulación de redes, promoción de la paz en el hemisferio y establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos con la participación de la sociedad civil. No obstante, su grado de "éxito" debe ser ponderado de acuerdo con sus objetivos. En algunos casos, el objetivo principal fue precisamente articular una red de centro académicos y activistas en torno al problema de la paz. En otros, se trató de redes que buscaban influir en el resultado de un proceso de resolución de conflicto en curso. En ciertos casos, la intención fue contribuir a la formación y educación en temas de paz.



Algunos ejemplos de articulación de redes en distintos niveles son:

### Redes de la sociedad civil

- Iniciativas en pro de la paz desarrolladas por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en Centroamérica (1980-2000).
- Iniciativas de la sociedad civil en la resolución del conflicto centroamericano (1980 en adelante).
- Programa de apoyo para la seguridad humana democrática en Centroamérica de la Universidad para la Paz (2000 en adelante).
- Iniciativa de organismos de la sociedad civil en torno a la Agenda de Seguridad Andino-Brasilera (2000 en adelante).
- Programa Plurianual “Democracia y Derechos Humanos en la Comunidad Andina”, integrado por los programas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (2002-2005), que involucra la promoción de los derechos humanos en la región.
- Comisión AdHoc Transitoria de Seguridad de la Sociedad Civil Centroamericana (2000 en adelante).
- Iniciativas del Foro Mundial Social en torno a la promoción de la paz (2000 en adelante).

### Redes académicas y de influencia en toma de decisiones

- Comisión Sudamericana de Paz (1980 en adelante).
- Consejo Latinoamericano de Investigaciones para la Paz, CLAIP (1980-1990).
- Consejo Latinoamericano de Defensa y Desarme, CLADDE (1980-1990).
- Programa de Relaciones Internacionales de América Latina, RIAL (1978-1993).

- Programa Paz y Seguridad en las Américas (Woodrow Wilson Center y FLACSO-Chile, 1990 en adelante).
- Proyecto CRIES y del Centro Europeo para la Prevención de Conflictos para el estudio del rol de la sociedad civil en la prevención de conflictos (2000 en adelante).
- The Latin American Working Group (Washington D.C.).
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. (Red académica con Sedes en 10 países de la región).

### Iniciativas nacionales

Existe un segundo nivel de experiencias vinculadas a la resolución de conflictos. En este caso, se trata de organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado una serie de programas e intervenciones con el objetivo de promover la paz, evitar escaladas de violencia y contribuir a la solución de conflictos en forma pacífica. Por lo general, estas entidades desarrollan un fuerte trabajo con organizaciones de base. Para ilustrar las características de estas organizaciones se pueden mencionar:

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, CIPRODEH, es una organización no gubernamental reconocida por el Estado de Honduras, sin fines de lucro. La organización está dedicada a la educación, promoción e investigación en favor de la protección de los derechos humanos en Honduras y su inserción en las políticas públicas. CIPRODEH es una entidad local caracterizada principalmente por promover la vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos, como condición para el ejercicio de una ciudadanía efectiva. Esta característica institucional le ha permitido ser una organización de apoyo a procesos de democratización local y nacional orientados a la deconstrucción de las estructuras autoritarias y desiguales de poder; esto incluye, sin duda, una más efectiva participación de la

ciudadanía en los asuntos públicos. Cuenta con cuatro áreas o programas de trabajo: programa para el fortalecimiento de la justicia; programa para el desarrollo de poblaciones vulnerables; programa de participación ciudadana, y programa de fortalecimiento institucional. Es una organización pequeña, con 11 funcionarios y una red de voluntarios en todo el país.

**EL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES, CELS**, es una organización no gubernamental, fundada en Argentina en 1979, para la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de Derecho en Argentina. El CELS está integrado por un equipo de trabajo multidisciplinario y pluralista, que entiende como derechos humanos aquellos reconocidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas y en el derecho internacional, recayendo en el Estado la responsabilidad por su respeto o por su violación. Con estas premisas y fundamentalmente a través del litigio de causas judiciales, el CELS trabaja para denunciar las violaciones a los derechos humanos, incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales y promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más vulnerables de la sociedad. El CELS desarrolla trabajo de promoción y seguimiento en áreas diversas como las violaciones a los derechos humanos en dictadura y democracia, violencia institucional y seguridad ciudadana, derechos económicos, sociales y culturales, tolerancia y no discriminación, acceso a la información, y libertad de expresión entre otros temas.

**EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, IDEELE**, de Perú, es una organización de derechos humanos sin fines de lucro que tiene por objetivo fundamental la promoción de los derechos humanos en ese país, y hacer una contribución significativa al éxito de la transición democrática a partir del aporte estructurado y eficaz desde una organización de la sociedad civil con presencia importante en la

vida nacional. Sus principales ejes temáticos son la paz, verdad, justicia, reparación y reconciliación, reforma judicial, el rol de las fuerzas armadas y las relaciones civiles militares, la seguridad ciudadana, el orden público y función policial, la libertad de prensa y acceso a la información, los mecanismos de participación ciudadana y fiscalización de la cosa pública, la lucha contra la discriminación con énfasis en el papel de la mujer en la vida pública y la histórica exclusión por razones de identidad racial y cultural, y el combate contra la corrupción. Desarrollan actividades a nivel nacional y cuentan con un extenso programa de comunicaciones para la difusión de sus actividades.

**EL SERVICIO PAZ Y JUSTICIA, SERPAJ**, es una organización no gubernamental fundada en 1981. El Secretariado Nacional en Uruguay está integrado al SERPAJ-América Latina y posee estatuto consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC-UNESCO). Definido por su esencia latinoamericana, su inspiración cristiana, ecuménica y humanista, el trabajo de SERPAJ se asienta sobre tres pilares: la mística y la práctica de la lucha pacífica, la participación en la construcción de una sociedad que supere las dominaciones y el respeto de los derechos de la persona y de los pueblos. En Argentina, por ejemplo, SERPAJ desarrolla un trabajo específico con los niños de la calle, intentando generar mecanismos de mediación entre la policía y los niños para prevenir la violencia policial contra ellos.

**VIVA RIO** en Brasil, es considerada como una experiencia exitosa de trabajo en prevención de la violencia urbana en América Latina y el Caribe (Recuadro 7). En este caso, se trata de una organización que además de contar con poco más de mil funcionarios, tiene una red amplia de voluntarios que abordan distintos ámbitos de la violencia incluyendo factores culturales, institucionales, vinculados a los medios de comunicación, e internacionales. Su éxito ha sido reconocido internacionalmente y hoy se encuentran en un proceso de compartir su experiencia de trabajo con otras redes y centros en América Latina.

### Recuadro 7

#### Una experiencia exitosa de acción civil en temas de violencia urbana

Río de Janeiro es una de las ciudades más violentas de Brasil, situación que se vincula con altos niveles de pobreza, desigualdad, comercio de drogas y corrupción. La crisis urbana que se desencadenó a comienzos de los años noventa fue el clima en que surgió VIVA RIO, una organización no gubernamental que ha diseñado estrategias alternativas para la reducción de la violencia urbana y de integración social. VIVA Río fue creada por iniciativa de un grupo de activistas voluntarios que hicieron campañas para acabar con la violencia en la ciudad. Frente a una gran escalada de violencia entre la policía y las organizaciones de narcotraficantes y entre los mismos narcotraficantes, VIVA Río propuso políticas de construcción de capital social y reformulación de técnicas policiales en las áreas más conflictivas de la urbe. Apoyados por investigaciones sociológicas y antropológicas, las propuestas de VIVA Río se basaron en un estudio epidemiológico de la violencia que llegó a identificar el vector principal de la violencia y el grupo de riesgo afectado por la violencia: el acceso y posesión de armas de fuego.

Se llegó a la conclusión que el grupo más afectado por la violencia tanto como víctimas como victimarios son hombres de entre 15 a 29 años que han abandonado sus estudios primarios. Este factor es muy importante debido a que en Brasil el certificado de enseñanza básica es fundamental para obtener un empleo declarado. Este es el grupo que sirve de base de reclutamiento para el tráfico de drogas y es en ese segmento donde VIVA Río desarrolla en las favelas actividades preventivas mediante programas de educación, la formación de capital social (microcrédito para emprendimientos generadores de empleo) y programas de policía comunitaria y microdesarme.

El éxito de VIVA Río le permite tener reconocimiento nacional e internacional. Tiene más de mil funcionarios y un presupuesto que en 2002 llegó a 6 millones de dólares, contando con el apoyo de los medios de comunicación, empresas y fundaciones internacionales. A partir de mediados de los noventa VIVA Río comenzó un diálogo con el gobierno del Estado de Río de Janeiro. Las autoridades han oído, asimilado y ayudado a implementar propuestas alternativas a la seguridad pública planteadas por esta organización.

El programa de Grupo de Policía para Áreas Especiales (GPAE), propuesto por Viva Río y desarrollado junto con el Gobierno Estadual ha conseguido reducir a cero el número de homicidios declarados en una favela particularmente violenta ubicada entre Ipanema y Copacabana, en el corazón turístico de la ciudad. La innovación ha consistido en llevar a la policía dentro de la favela con el objetivo de brindar el servicio de "seguridad pública" a sus habitantes, del que hasta el momento estaban privados, lo que daba lugar a que el espacio dejado por el Estado fuera ocupado por los traficantes de drogas.

La presencia policial a su vez brinda seguridad a programas beneficiosos para la comunidad tales como guarderías infantiles y centros educativos y culturales. En cierto sentido, VIVA Río desarrolla una estrategia de "desarrollo alternativo urbano" que ha comenzada a ser aplicada por el gobierno en otras favelas de la ciudad.

### Recuadro 8

#### Intervención de la Ministra de Defensa Michelle Bachelet en la clausura de la Conferencia

La ministra de defensa, Michelle Bachelet, sostuvo que uno de los principales desafíos de las autoridades políticas en el siglo XXI es insertar nuevos actores al proceso de decisiones en materias de interés público, sean estos de la sociedad civil nacional o internacional. Los debates que están teniendo lugar en el actual contexto internacional de amenazas a la seguridad global hacen particularmente necesario esta colaboración con la sociedad civil.

Sostuvo asimismo, que para confrontar los nuevos temas de la agenda global deberían desarrollarse ciertos principios organizadores. El primer principio es que las Naciones Unidas deberían constituirse en protagonistas en la resolución de conflictos. La función principal de esta organización es garantizar la paz y seguridad internacional. En segundo lugar, la cooperación multilateral debe ser fortalecida. Estimular el proceso de integración e incrementar las medidas de confianza mutua, por ejemplo, fortalecerá un clima de paz y estabilidad en el mundo, y en particular en América Latina.

Finalmente, en relación a temas de soberanía, la ministra Bachelet sostuvo que es necesario establecer una adecuada conjugación entre la diversidad y el respeto a la realidad de cada país. Lo anterior, sólo puede hacerse en el marco de la aceptación de la ley internacional como instrumento de regulación de nuestras relaciones internacionales.

## V. Mirando hacia el futuro: sociedad civil, paz y crisis regional

El nuevo contexto internacional impone una serie de desafíos a la comunidad hemisférica. En América Latina y el Caribe el problema no es tanto “la amenaza terrorista global”, sino que más bien las consecuencias de ciertas políticas adoptadas por las grandes potencias que pudiesen tener efectos negativos en una región que es vulnerable. El riesgo más evidente se refiere a la creciente tendencia hacia la militarización de diversos conflictos, en particular los ligados con la lucha contra el narcotráfico; el mayor énfasis puesto por EE.UU. en el uso de la fuerza para la resolución de problemas como el tráfico de drogas, inmigración y delincuencia internacional son parte de este riesgo.

Los ejes de preocupación para los países de América Latina y el Caribe son temas vinculados al desarrollo, la pobreza, la exclusión social y crecientes niveles de violencia urbana. En algunas subregiones del continente (Área Andina, Centroamérica y el Caribe), la agenda del desarrollo se combina con el problema del conflicto derivado del narcotráfico. Es aquella combinación la que incrementa los riesgos de un incremento de los niveles de violencia en la región.

La sociedad civil podría desempeñar un papel central en la prevención de conflictos mediante la promoción, el seguimiento y la participación en la implementación de ciertas políticas en forma conjunta con gobiernos y agencias multilaterales. Su papel puede orientarse a distintos niveles de intervención en los planos local, nacional y multilateral.

América Latina y el Caribe tienen una tradición de resolución pacífica de conflictos que podría ser un excelente punto de referencia para otras regiones del mundo. La experiencia acumulada permitiría rearticular experiencias destacables del pasado y potenciar iniciativas existentes. Lo anterior requiere un gran esfuerzo de:

- **COORDINACIÓN**, lo que hoy se ve facilitado por el acceso a tecnologías de bajo costo y amplio alcance.
- **FOCALIZACIÓN**, en torno a ciertas regiones y países particularmente vulnerables en la región.
- **SENSIBILIZACIÓN**, en torno a los conflictos latentes y presentes en la región.

### Recomendaciones de política y cursos de acción

Los grupos de trabajo que participaron en la Conferencia Internacional organizada en Santiago de Chile por FLACSO-Chile, organizaron sus recomendaciones en torno a cuatro ejes temáticos: fortalecimiento de redes, seguimiento de conflictos, cursos de acción y el rol de los medios de comunicación.

#### Sobre el fortalecimiento de redes

**IDENTIFICACIÓN DE REDES.** Es importante efectuar un diagnóstico y catastro de las redes que están trabajando en temas de seguridad y prevención de conflictos a nivel regional. A través del uso de Internet,

podría establecerse un sitio donde no sólo se presente una lista de las organizaciones que de algún modo están haciendo activismo hoy en el hemisferio, sino que también se den a conocer experiencias exitosas de trabajo Interorganizacional.

**COORDINACIÓN DE REDES.** Se hace necesaria una mayor integración de la sociedad civil a través de redes capacitadas con diseños estratégicos concretos. Dicha coordinación es difícil pero sería posible que se establecieran prioridades estratégicas o “campañas” frente a las cuales podrían coordinarse algunas acciones. El conflicto en Colombia y la situación en algunos países de Centroamérica y el Caribe (Guatemala, Haití y Nicaragua) podrían ser ejes articuladores de esta acción organizada.

**DERECHOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE PAZ.** Se requiere generar más vínculos, intercambio de experiencias, y coordinación entre aquellos grupos trabajando en la defensa de los derechos humanos y aquellos vinculados a la promoción de paz. Por una parte, el activismo en el ámbito de los derechos humanos podría incorporar con mayor énfasis la dimensión de la paz, como asimismo el activismo por la paz en el mundo y en la región podría incorporar la experiencia de trabajo de los grupos de derechos humanos.

**DESARROLLO DE EXPERTISE.** Es esencial generar mayor capacitación en áreas vinculadas a la prevención de conflictos. El objetivo final es que se reconozca la labor de la sociedad civil en ámbito específicos, se recurra ellas como fuente de información y análisis y éstas gocen de mayor credibilidad frente a los gobiernos y a nivel internacional. Se podrían propiciar talleres subregionales en los países ya mencionados, en donde los protagonistas del trabajo de prevención de conflictos además de académicos y expertos pudiesen desarrollar nuevos mecanismos y estrategias para la prevención de conflictos en situaciones coyunturales específicas.

**COOPERACIÓN NORTE-SUR.** En la actualidad existe una nutrida red de relaciones entre organismos de la sociedad civil de Estados Unidos, Europa y Canadá con países en conflicto (particularmente en Colombia y Centroamérica). Parece ser que el trabajo más fructífero se da entre redes abordan temas específicos: tráfico de armas en Centroamérica y Brasil, promoción de la paz en Colombia y Centroamérica, apoyo para los desplazados en Colombia, etc. Existe un importante área de cooperación que podría desarrollarse en términos de: (a) el seguimiento de transferencias de armas desde Estados Unidos hacia América Latina, y (b) el seguimiento del rediseño de políticas en entrenamiento y cooperación militar entre Estados Unidos y América Latina. Una cooperación efectiva entre organizaciones del norte y sur del hemisferio podría organizarse en torno a ejes temáticos específicos y en donde la articulación del seguimiento requiera de ambas regiones. Por ejemplo, se requeriría dar a conocer en América Latina el trabajo de grupos que siguen el envío de ayuda desde EE.UU. hacia la región. Lo anterior, podría articularse con campañas temáticas que abordan el tema del armamentismo en América Latina.

Al mismo tiempo, se requiere fortalecer la relación que existe entre las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y Europa, dado que la audiencia europea es particularmente sensible a esta región.

**APERTURA DE ESPACIOS DE INFLUENCIA.** Un ámbito importante a desarrollar es que nuevos grupos de la sociedad civil se incorporen a los espacios existentes de influencia en procesos de toma de decisión nacional e internacional. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos (OEA) acepta la acreditación de organismos no gubernamentales para participar en sus asambleas periódicas y acceder a información sobre el trabajo que desarrolla dicho organismo. Sería importante

ampliar aquellos espacios de influencia que –aunque todavía informales– son útiles para la articulación de demandas ciudadanas hacia instituciones hemisféricas.

### Sobre el seguimiento de los conflictos

**OBSERVATORIO DE CONFLICTOS.** Se enfatizó la labor de los centros académicos en este ámbito, y la necesidad de generar observatorios regionales de conflictos y aplicar metodologías de seguimiento y evaluación que permitan generar mecanismos de alerta temprana. Aquella tarea no debería recluirse a la academia, sino que debería tener un impacto más general en los medios de comunicación, gobiernos y agencias gubernamentales.

### Sobre las acciones que se podrían materializar

**PROMOCIÓN DE LA PAZ EN LA REGIÓN.** Se destacó el rol de la sociedad civil en términos de crear conciencia en la opinión pública local, regional e internacional. Lo anterior supone un trabajo colaborativo entre distintas organizaciones de la sociedad civil con el propósito de recabar información oportuna.

Lo anterior podría materializarse a través de actos concretos que ilustraran y concientizaran a la opinión

pública sobre conflictos en la región. Por ejemplo, las dimensiones y gravedad del conflicto en Colombia generalmente no son debatidos ni conocidos en el resto del hemisferio, salvo en los países directamente afectados por el mismo y a través de noticias esporádicas que dan cuenta de éste. Una campaña itinerante de difusión y promoción de la paz en la región que contemplara exhibiciones, análisis de la problemática de las drogas, discusión sobre el conflicto y testimonios podría tener un alto impacto en sociedades generalmente no expuestas a esta problemática.

### Sobre la relación con los medios de comunicación

**DIÁLOGO CON LOS MEDIOS.** Se requiere establecer un diálogo entre los medios de comunicación y organizaciones sociales con la finalidad de diseñar estrategias conjuntas para el diseño de una agenda en pro de la paz.

**CURSOS PARA PERIODISTAS.** Un área importante a explorar es la interacción con periodistas en materias de política internacional, conflictos sociales en la región, y resolución de conflictos. Experiencias de intercambio académico, cursos de posgrado y diplomados permitirían abrir oportunidades para la discusión de nuevo enfoques y visiones sobre los conflictos de la región.

## Recuadro 9 Grupos de Trabajo: síntesis de la discusión

### GRUPO A. PROMOCIÓN DE PAZ Y SOCIEDAD CIVIL: EL ROL DE LAS INSTANCIAS MULTILATERALES

- Se destacó la importancia del fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de conflictos y de la consolidación de las reformas judiciales que den respuesta efectiva a las demandas de la población;
- Se valoró la posibilidad de reforzamiento de la capacidad de la OEA para la prevención anticipada de conflictos, reforzando en esa misma línea el potencial político de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
- Los participantes coincidieron en la necesidad de ir venciendo las desconfianzas y resistencia con respecto a EE.UU., explorando formas novedosas de persuasión con el Congreso, la prensa y las organizaciones no gubernamentales. Se indicó que a veces se observa un antiamericanismo simplista sin propuestas y existe en muchos la convicción de que no es posible en la región un multilateralismo sin EE.UU.
- Existió acuerdo en la necesidad de reconocer que las instancias regionales no son todavía capaces de dar cuenta de muchos conflictos latentes, generados por disputas fronterizas por ejemplo, que no llegan al seno de la OEA y que hay cierta falta de solidaridad o compromiso de los países para asumir en dichos foros temas como el de Colombia;
- Se coincidió en la amenaza de que los programas antidrogas se conviertan en programas antiterrorismo, perdiendo su sentido original y desconociendo las variables sociales de los mismos. Algunos participantes estimaron que no existen mecanismos eficientes de verificación del cumplimiento de los compromisos sobre instrumentos y políticas antidrogas, mientras otros afirmaron que sí existen (como en la OEA) pero que es necesario activarlos de manera más comprometida. Se mencionó también la obsolescencia de la normativa internacional de Naciones Unidas al respecto y la necesidad de actualizarla. Se enfatizó que las respuestas militares a las políticas sociales agudizan el conflicto.
- Hubo consenso en la necesidad de observar aquellos factores que componen los conflictos locales y que pueden transnacionalizarse fácilmente, como el tráfico de drogas, armas, trata de seres humanos, intereses de empresas transnacionales.
- Se insistió en la necesidad de capacitar a las cancillerías en los nuevos temas vinculados a la prevención de conflictos y la construcción de la paz.
- Se reiteró la urgencia de mantener el “mínimo humanitario” en los distintos conflictos, dando un impulso a la difusión y análisis de los instrumentos de derecho internacional humanitario.
- La inserción de los temas vinculados a la seguridad militar tradicional en foros más amplios de seguridad humana, desarrollo y otros esquemas más amplios fue considerada un instrumento eficiente para una mutua retroalimentación de las distintas visiones. También, una mayor difusión y discusión del Informe del Panel de las Naciones Unidas sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asimismo, se consideró una instancia favorable a la construcción de políticas nacionales de paz y a una nueva mirada al papel de las fuerzas armadas y policiales.
- Se consideró necesario relevar el hecho de que existen muchos recursos de prevención y negociación de conflictos en el Sistema Internacional e Interamericano y que no se debían oponer los mecanismos institucionalizados a los mecanismos ad-hoc, que debían ser complementarios y tenían roles particulares que cumplir.
- Se recomendó avanzar en la incorporación de un componente político a la Carta Democrática.
- Se exhortó a potenciar aquellas circunstancias que crean opciones beneficiosas de integración, aprovechándolas para enriquecer la cooperación económica o comercial con enfoques sociales, políticos y de construcción de paz.
- Se consideró fundamental diferenciar las distintas fases de un conflicto (alerta temprana, prevención, resolución, terminación) y definir los roles en los que cada actor (estados, organismos internacionales o interamericanos, sociedad civil) puede ser más eficiente.

### GRUPO B. EXPERIENCIAS NACIONALES EN LA PROMOCIÓN DE UNA AGENDA EN PRO DE LA PAZ

Los conflictos en la región tienden a ser de carácter interno (doméstico) más que interestatal. En este sentido, existe la percepción que muchos de los conflictos violentos (crimen organizado, violencia armada, narcotráfico, delincuencia) han tendido a resolverse a través de propuestas de “mano dura” más que en torno a la búsqueda de soluciones alternativas. Asimismo, se ha argumentado que la política exterior estadounidense a partir del año 2001, estaría “militarizando” la resolución de conflictos domésticos en América Latina.

Las experiencias nacionales muestran opciones concretas en la solución de conflictos internos, en las cuales la participación de la sociedad civil ha sido fundamental para avanzar en el objetivo de llegar a una nueva noción de seguridad y sustentabilidad democrática. Asimismo, establece cuatro puntos comunes que cruzan el análisis y, por ende, las propuestas para superar los niveles de conflicto domésticos.

**Factores comunes**

- El rol represivo de los Estados. Con el fin de justificar la mantención del orden, el exceso en el uso de fuerza de las policías todavía no se puede controlar. Guatemala es un caso emblemático.
- La represión se concentra en los sectores pauperizados de la sociedad. Son aquellos sectores de la sociedad que han estado marginados de los procesos desarrollo económico. Ocurre en el caso argentino y en menor medida en el de Guatemala.
- Sistemas judiciales débiles, o aplicación de justicia de baja intensidad. La no existencia de un Estado de derecho es un impedimento para superar los problemas.
- Se confirma la hipótesis que plantea una militarización de la agenda de Estados Unidos hacia América Latina.

**Recomendaciones**

- Preponderancia y un papel más activo del Estado junto a una mayor participación de la ciudadanía. Sin duda, el caso más representativo es Viva Río (Río de Janeiro).
- Se podrían propiciar modelos de prevención para mejorar la gestión de la policía.
- Combatir las raíces de la violencia. Para ello se podrían mejorar las estrategias de integración social, económica y política con una mayor participación de la sociedad civil en los procesos de gestación de las políticas públicas.
- Redefinición de los roles policiales y de la participación del ejército al interior de los Estados. Una relación de tránsito de la concepción de seguridad tradicional (doctrina de seguridad nacional) a una de seguridad alternativa, con preocupación en el ser humano.
- Fortalecimiento de la institucionalidad de los Estados.

**GRUPO C. EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PROMOCIÓN DE PAZ EN LA REGIÓN**

El debate de este grupo de trabajo giró en torno a dos ejes centrales: a) definir conceptualmente sociedad civil y conflicto; b) generación de una agenda de acción de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención y resolución de conflictos.

**Definiciones conceptuales**

Con respecto al primer punto se definió sociedad civil como "cualquier grupo organizado de la sociedad que no pertenece al gobierno o al mercado, ni intenta gobernar (se excluyen los partidos políticos) pero intenta incidir directa o indirectamente en las políticas públicas". Se destacó la composición heterogénea de las organizaciones de la sociedad civil y redes sociales, las que en muchos casos tienen objetivos, agendas y estrategias diferentes, e inclusive, contrapuestas.

En relación a la definición de conflicto, se señaló que se entendía este como la contraposición de intereses por dos o más actores, con algún potencial de violencia, no exclusivamente armada. Se habló de tres tipos de conflictos: a) conflictos con expresiones armadas, ya sean internos o internacionales; b) conflictos que son herencia de guerras civiles (caso centroamericano); c) conflictos que se presentan en países que vivieron en dictaduras.

**Papel de la sociedad en la resolución de conflictos y agenda de acción**

Se enfatizó que la sociedad civil puede desempeñar un importante papel en la prevención de conflictos en cuanto a la elaboración de diagnósticos de alerta temprana que permitan formular propuestas para evitar la agudización de los conflictos. En este marco pueden tener un papel determinante al fomentar y establecer un diálogo entre los diferentes actores involucrados, poniendo énfasis en los temas de las causas estructurales de los conflictos.

Otro aspecto destacado se vincula con el papel que la sociedad puede desempeñar en el seguimiento y evaluación de los impactos de los conflictos, así como en la promoción de mecanismos de resolución pacífica de los mismos.

Con respecto a la agenda de acción se destacó:

- Coordinación de redes. Es necesaria una mayor integración de la sociedad civil a través de redes capacitadas con diseños estratégicos concretos. También es importante efectuar un diagnóstico y catastro de las redes que están trabajando en temas de seguridad y prevención de conflictos a nivel regional.
- Desarrollo de *expertise*. Es esencial generar mayor capacitación en áreas vinculadas a la prevención de conflictos. El objetivo final es que se reconozca la labor de la sociedad civil en ámbitos específicos, se recurra a ellas como fuente de información y análisis y éstas gocen de mayor credibilidad frente a los gobiernos y a nivel internacional.
- Observatorio de conflictos. Se enfatizó la labor de los centros académicos en este ámbito, y la necesidad de generar observatorios regionales de conflictos así como de aplicar metodologías de seguimiento y evaluación que permitan generar mecanismos de alerta temprana.
- Difusión y papel de los medios de comunicación. Se destacó el rol de la sociedad civil en términos de crear conciencia en la opinión pública local, regional e internacional. También la necesidad de establecer un diálogo entre los medios de comunicación y organizaciones sociales con la finalidad de diseñar estrategias conjuntas para el diseño de una agenda en pro de la paz.



## Programa de la Conferencia

Jueves 28 de Agosto, 2003

09.00 - 10.00

Inscripción y Café

10.00 - 10.45

Inauguración.

**Francisco Rojas Aravena**, Director  
FLACSO – Chile.

**Augusto Varas**, Representante Fundación  
Ford para el Cono Sur y el área Andina.

**José Miguel Insulza**, Vicepresidente de la  
República de Chile.

10.45 - 11.45

EL ROL DEL DERECHO INTERNACIONAL Y LAS INSTITU-  
CIONES MULTILATERALES EN LAS CRISIS REGIONALES Y  
POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS. VISIONES DES-  
DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS.

**Narcís Serra**, Ex Vice Primer Ministro, Ex Mi-  
nistro de Defensa, España. Actual Diputado.

**Gelson Fonseca**, Embajador de Brasil en  
Chile, ex representante permanente de Brasil  
en Naciones Unidas.

**Anthony Romero**, Director ejecutivo de la Unión  
Americana por las libertades civiles (ACLU).

11.45 - 12.15

Debate

\* Moderador: Francisco Rojas A., FLACSO– Chile.

12.15 - 12.30

Café

12.30 - 13.10

ORGANIZACIONES MULTILATERALES Y POLÍTICA DE ES-  
TADOS UNIDOS.

**John Renninger**, Director de la División para  
las Américas y Europa del departamento de  
Asuntos Políticos de las Naciones Unidas.

**Rosario Green**, Embajadora de México en  
Argentina. Ex Subsecretaria de ONU para  
Asuntos Político, ex ministra de Relaciones Ex-  
teriores de México.

13.10 - 13:30

Debate

\* Moderador: Claudio Fuentes , FLACSO – Chile.

13.30 - 15.00

Almuerzo Salón Torres del Paine (G).

15.00 - 16.00

POLÍTICA HEMISFÉRICA DE ESTADOS UNIDOS Y CONFLIC-  
TOS REGIONALES EN AMÉRICA LATINA: OPORTUNIDADES  
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS.

**Pilar Gaitán**, Fundación Ideas para la Paz,  
Colombia.

**Ricardo Córdova** Fundación Dr. Guillermo  
Manuel Ungo (FUNDAUNGO), El Salvador.

**Francine Jácome**, Coordinadora Regional  
de Investigaciones Económicas y Sociales  
(CRIES), Venezuela.

16.00 -16.30

Debate

\*Moderadora: Paz Milet, FLACSO-Chile

16.30 - 17.00

Café

17.00 - 18.00

MULTILATERALISMO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN AMÉRICA LATINA

**Carlos Portales**, Director de Política Exterior, Chile

**Michael Shifter**, Diálogo Interamericano.

**Francisco Rojas Aravena**, FLACSO - Chile.

\*Moderadora: Diana Tussie

18.00 - 18.30

Debate

\*Moderadora: Carmen Rosa de León, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Guatemala.

## Viernes 29 de Agosto, 2003

9.15 - 11.30

Grupos de trabajo

### GRUPO A - SALÓN TACORA

Medidas para contener la polarización y militarización de conflictos en la región: fortaleciendo las instancias multilaterales.

\*Modera: Clovis Brigagao, Director adjunto del Centro de Estudios de las Américas (CEAs), Universidad Cândido Mendes, UCAM, Río de Janeiro.

### GRUPO B - SALÓN SIERRA NEVADA I

Experiencias subregionales y nacionales en la resolución pacífica de conflictos: agenda pro-paz.

\*Modera: Sara Larraín, Directora ejecutiva, Programa Chile Sustentable.

### GRUPO C - SALÓN SIERRA NEVADA II

El rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos regionales y extra regionales.

\*Modera: Diana Tussie, FLACSO-Argentina.

11.30 - 12.00

Café

12.00 - 13.00

Plenario. Agenda para la acción: discusión de las estrategias y acciones privadas y públicas para el fomento de la paz en el continente.

\*Modera: Francisco Rojas Aravena, FLACSO-Chile.

13.00 - 13.30

Clausura:

**Michelle Bachelet**, Ministra de Defensa de Chile

### Sede Académica FLACSO - Chile

16.00 - 18.30

Reunión grupo de trabajo y seguimiento

Taller sobre seguimiento, monitoreo y estrategias sobre la diseminación de temas vinculados a la paz y resolución pacífica de controversias.

16.00 - 16.30

Introducción:

Claudio Fuentes S. y Francisco Rojas Aravena

16.30 - 17.30

Discusión.

18.15 - 18.30

Clausura.

# Participantes

## ALEMANIA

Wolf Grabendorf, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL)

## ARGENTINA

Andrea Fabiano, Embajada de Argentina

Carlos Gabetta, Le Monde Diplomatique

Diana Tussie, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

María del Carmen Verdú, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

Víctor Abramovich, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Roberto Saba, Asociación por los Derechos Civiles

## AUSTRIA

Marianne Da Costa, Embajadora de Austria en Colombia

## BRASIL

Bernardo Sorj, Viva Río

Clovis Brigagao, Universidad Cándido Méndez

Gelson Fonseca, Embajada de Brasil en Chile

Pablo Dreyfus, Viva Río

## COLOMBIA

Dario Villamizar, Medios para la Paz

Guillermo Carvajalino, Fundación Empresarios por la Educación

Henry Salgado, Centro de Investigación y Educación Popular - Colombia (CINEP)

Ingrid Bolivar, Centro de Investigación y Educación Popular - Colombia (CINEP)

Pilar Gaitán, Fundación Ideas para la Paz

Rodrigo Gutiérrez, Fundación Ideas para la Paz

## COSTA RICA

Ana Yancy Espinoza, Fundación Arias

Cecilia Cortes, Fundación de Servicios Exteriores para la Paz y la Democracia (FUMPADEM)

Luis Emilio Fernández, Embajada de Costa Rica

## ECUADOR

Adrián Bonilla, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Augusto Saa, Embajada de Ecuador

Francisco López, Auditoría Democrática Andina.

Gonzalo Salvador, Embajada de Ecuador

## ESTADOS UNIDOS

Anthony Romero, American Civil Liberties Union

José Miguel Vivanco, Human Rights Watch

Joy Olson, Washington Office on Latin America (WOLA)

Michael Shifter, Diálogo Interamericano

Sanho Tree, Inter Press Service (IPS)

Tracy De Wid, Embajada EE.UU.

James Cypher, Universidad Estatal de California

## EL SALVADOR

Ricardo Córdova, Fundación Dr. Guillermo Manuel UNGO (UNGO)

## ESPAÑA

Juan Alfonso Ortiz, Embajada de España  
Narcís Serra, Centro de Relaciones Internacionales y  
Cooperación Internacional (CIDOB)

## GUATEMALA

Carmen Rosa De León, Instituto de Enseñanza para el  
Desarrollo Sostenible (IEPADES)

## MARRUECOS

Adelhadi Boucetta, Embajada de Marruecos  
Bouchra Boudchiche, Embajada de Marruecos

## MÉXICO

Gustavo Castro, Centro de Investigaciones Económicas  
y Políticas (CIEPAC)  
Rosario Green, Embajadora de México en Argentina  
Ricardo Valero, Embajador de México en Chile

## PANAMÁ

Juan Humberto Chávez, Embajada de Panamá

## PERÚ

Ana María Tamayo, Instituto de Defensa Legal (IDL)  
Ernesto De la Jara, Instituto de Defensa Legal (IDL)

## REPÚBLICA DOMINICANA

Juan Bonnelly, Embajada República Dominicana

## VALENZUELA

Francine Jacóme, Coordinadora Regional de Investi-  
gaciones Económicas y Sociales (CRIES)  
Gerardo Delgado, Embajada de Venezuela

## CHILE

### a. Organismos no gubernamentales

Alejandro Bahamondes, Partido por la Democracia  
(PPD)

Alejandro Iturra, Universidad Arcis

Alvaro Pedroza, Universidad Alberto Hurtado

Ana María De la Jara, Asociación Chilena de Orga-  
nismos no Gubernamentales A.G.

Ana Ortega, Universidad Alberto Hurtado

Angel Manrique, Universidad Alberto Hurtado

Angela Ibarra, Universidad Alberto Hurtado

Angélica Vasquez, SERPAJ

Carlos Delgado, Universidad de California

Carlos Gutiérrez, Universidad Arcis

Cecilia Medina, Universidad de Chile

Cecilia Valdivia, Universidad Alberto Hurtado

Claudia Martínez, Universidad Católica

Claudio Andrade, Ministerio del Interior

Claudio Pardo, Televisión Nacional de Chile (TVN)

Diego Iglesias, Chile 21

Esteban Montes, Universidad Andrés Bello

Farith Fraija, Universidad Alberto Hurtado

Felipe González, Universidad Diego Portales

Fernando Kreis, Strategic Alliance

Gonzalo Alvarez, Academia de Humanismo Cristiano

Hector Chamaca, Academia de Humanismo Cris-  
tiano

Hernán Rodríguez, Universidad de Chile

Iris Vittini, Universidad de Chile

Ivan Zamora, Asociación Chilena de Organismos no  
Gubernamentales A.G. (ACCION)

Jacobo Schatan, CENDA

Javier Campos, Universidad Alberto Hurtado

Javier Couso, Universidad Diego Portales

José Martínez, Universidad Alberto Hurtado

Juan Carlos Aguirre, Academia de Humanismo Cristiano  
 Juan Domingo Silva, Universidad Arcis  
 Judith Castro, Universidad Alberto Hurtado  
 Manuel Baquedano, Instituto Educación Popular (IEP)  
 María Sol Mina, Universidad Alberto Hurtado  
 Mario Vargas, Buenos Días América  
 Marco Fernández, Universidad Arcis  
 Marek Hoehn, Academia de Humanismo Cristiano  
 Matilde Wolter, Agencia EFE  
 Mercedes Montoya, SERPAJ  
 Nelson Montenegro, ANEPE  
 Oscar Gamarra, Universidad Alberto Hurtado  
 Ricardo Hormazabal, Universidad de Chile  
 Roberto Durán, Universidad Católica  
 Rodrigo Hernández, Universidad Alberto Hurtado  
 Rosa Gongora, Universidad Alberto Hurtado  
 Sara Larraín, Chile Sustentable  
 Victor Finschi, Universidad Diego Portales  
 Walter Sánchez, Universidad de Chile  
 Walter Krohne, CELAPI

## b. Organismos Gubernamentales

Alejandro Ahumada, Ministerio de Relaciones Exteriores  
 Renan Fuentelba, Ministerio de Defensa  
 Ignacio Concha, Ministerio de Relaciones Exteriores  
 Eduardo Ortega, Ministerio de Relaciones Exteriores  
 Amira Esquivel, Ministerio Relaciones Exteriores

## OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

John Renninger, Organización de Naciones Unidas (ONU)  
 Carmen Artigas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 Luis Yañez, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 Roberto Rensi, Unión Europea

## FUNDACIÓN FORD

Martín Abregu, Región Andina y Cono Sur  
 Cristina Eguizabal, México y Centro América  
 Ana Toni, Brasil  
 Augusto Varas, Región Andina y Cono Sur

## FLACSO-CHILE

David Álvarez, Investigador  
 Natalia Escobar, Investigadora asistente  
 Claudia Fuentes, Investigadora  
 Claudio Fuentes, Coordinador Académico  
 Paz Milet, Coordinadora Área RRII  
 Francisco Rojas Aravena, Director  
 Anthony Tillett, Profesor visitante  
 Luciano Tomassini, Coordinador Estudios Públicos  
 Carlos Vergara, Bibliotecario documentalista  
 Andrés Villar, Investigador  
 Keizer Wilemijn, visitante, Universidad de Leiden, Holanda

# Documentos

Documentos preparados para la Conferencia (disponibles en <http://www.flacso.cl>)

- Bolívar, Ingrid J. (2003) "El rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos: la ambigüedad de los contextos y de los usos políticos de las invocaciones". CINEP, Colombia.
- Castro, Gustavo (2003) "Petro-militarización del continente y de la América de en medio". Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), México.
- Cortés, Cecilia (2003) "Mayores Sinergias entre Actores Locales e Internacionales para la Contención de Conflictos". FUNPADEM, Costa Rica.
- De la Jara, Ernesto (2003) "Comentarios sobre las preguntas planteadas en el grupo B, a partir de la experiencia peruana". Instituto de Defensa Legal, Perú.
- De León-Escribano, Carmen Rosa (2003) "Experiencias subregionales y nacionales en la resolución pacífica de conflictos: Agenda pro-paz". IEPADES, Guatemala.
- Dreyfus, Pablo (2003) "Experiencias subregionales y nacionales en la resolución pacífica de conflictos: Agenda pro-paz". Viva Rio, Brasil.
- Fuentes Saavedra, Claudio (2003) "Tres Dilemas en el Sistema Internacional. Terrorismo, Soberanía Nacional y Unipolarismo". FLACSO, Chile.
- Gaitán, Pilar (2003) "La reconstrucción del Estado y el papel de la Sociedad Civil frente al Conflicto interno en Colombia". Fundación Ideas para la paz, Colombia.
- Grabendorff, Wolf (2003) "Medidas para contener la polarización y militarización en la región: el rol de los actores externos". FESCOL, Colombia.
- Green, Rosario (2003) "Un nuevo regionalismo latinoamericano para un orden multilateral alterado". Embajada de México en Argentina, Argentina.
- Jácome, Francine (2003) "Crisis de gobernabilidad en Venezuela: posibles escenarios". CRIES, Venezuela.
- Jácome, Francine (2003) "El rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos: la ambigüedad de los contextos y los usos políticos de las invocaciones". CRIES, Venezuela.
- Jaramillo Edwards, Isabel (2003) "Medidas para contener la polarización y militarización de conflictos en a región: el rol de los actores externos". Centro de Estudios Sobre América. La Habana.
- López Bermúdez, Francisco (2003) "El desprecio como política". Auditoría Democrática Andina, Ecuador.
- Olson, Joy (2003) "The role of civil society organizations in the U.S. in promoting the peaceful resolution of conflict in Latin America – a Perspective from U.S. Civil Society". Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos.
- Romero, Anthony D. (2003) "La importancia de una agenda pro-paz en las Américas". *American Civil Liberties Union*, Estados Unidos.



- Salgado, Henry (2003) "Plan Colombia: de la guerra contra las drogas a la lucha contrainsurgente". CINEP, Colombia.
- Sánchez, Walter (2003) "Las Naciones (des) – unidas después de la guerra de Irak". Universidad de Chile, Chile.
- Shifter, Michael (2003) "Medidas para contener la polarización y militarización de conflictos en la región: el rol de los actores externos". Inter-American Dialogue, Estados Unidos.
- Solis, Luis Guillermo (2003) "¿Recomposición hegemónica en Centroamérica? Las variables regionales". FUMPADEM, Costa Rica.
- Sorj, Bernardo (2003) "Respuestas Sumarias". Viva Rio, Brasil.
- Tamayo, Ana María (2003) "Rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos regionales y extraregionales". Instituto de Defensa Legal, Perú.
- Verdú, María del Carmen (2003) "Políticas Represivas del Estado Argentino". CORREPI, Argentina.
- Villamizar, Darío (2003) "Sociedad Civil y Conflicto Armado en Colombia". Medio para la paz, Colombia.
- Vivanco, José Miguel (2003) "Estrategia Global Contra el Terrorismo". Human Rights Watch, Estados Unidos.
- Vivanco, José Miguel (2003) "Negociaciones con Grupos Irregulares Armados". Human Rights Watch, Estados Unidos.
- Yancy Espinoza, Ana (2003) "La sociedad civil, algunas consideraciones". Fundación Arias, Costa Rica.

## Otras fuentes consultadas

- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). *Informe Anual de Derechos Humanos en Argentina* (Varios años).
- Fuentes Saavedra, Claudio y Francisco Rojas Aravena. "El patio trasero. Estados Unidos y América Latina post Irak". *Nueva Sociedad*, N° 185, 2003.
- Fuentes Saavedra, Claudio, *Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police Violence in Democratic Argentina and Chile*. Tesis de Grado Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, 2003.
- Kissinger, Henry. Política exterior y ataques preventivos. *La Tercera*, 9 de Mayo, 2003.
- Krasevac-Szekely, Kimberly y Luis Gilberto Murillo (2003) "Give Peace a Place: LWE's Initiative to Fit the Pieces Together".
- Rojas Aravena, Francisco. "La política de la administración Bush". *Foro 21*, N° 18, octubre 2002.
- Serra, Narcís. "Estados Unidos y la guerra de Irak". *El País*, marzo de 2003.
- Small Arms Survey. *Spray Bullets: The Impact of Small Arms Misuse in Central America*. *Occasional paper*, Número 5, Octubre 2002.
- Shifter, Michael. "A Policy for the Neighbors". *The New York Times*, 18 de julio de 2003.
- U.S. National Security Strategy. October 2002.
- U.S. National Strategy for combating terrorism". March 2003.
- World Relief, Lutheran (2003) "Developing a Framework that links Local Peacebuilding to National and International Policymaker".

# Introduction

On August 28-29, 2003, with the support of the Ford Foundation, the *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*, FLACSO-Chile (Latin American Faculty of the Social Sciences) organized the International Conference: Peace, Regional Crisis and U.S. Foreign Policy. The conference brought together over one hundred representatives of civil society, multilateral organizations and governments, as well as academics from eighteen American and European countries. Especially invited were representatives of civil society organizations from the hemisphere to discuss the impact of the new international context, recent tendencies in U.S. foreign policy and the potential impact of these trends on the former whereby future conflicts are resolved.

The central objectives of the meeting were: to evaluate the role of multilateral instances in the resolution of conflicts given the present international context; to take account of the problems and alternatives for a peaceful resolution of conflicts in Latin America and the Caribbean; and to debate choices facing the development of a hemispheric peace agenda. In this framework, participants sought to evaluate and diagnose the effects of the present U.S. foreign policy. The recently manifest trend towards resolving conflicts by military means has increased uncertainty about the effects that this tendency may unleash in different regions. It is necessary to develop an informed debate about the changes that have occurred in the world and in the hemisphere, which includes an analysis of both the region's vulnerabilities as well as opportunities for cooperation. The conference opened up a space for the interchange of ideas and the discussion of actions that civil society actors in the region may develop in regard to a pro-peace agenda.

The organizers of the conference established a three-stage working methodology. At the first stage, representatives of civil society were asked to respond to a questionnaire regarding matters related with: (a) the role of multilateral action in the resolution of conflicts; (b) national experiences with peaceful conflict resolution; and (c) the role of organized civil society in the promotion of a pro-peace agenda. As a result of this stage, twenty-six works were received which served as the basis for the debate effected at the following stage. The second stage consisted of a one and a half day international conference which combined presentations by specialists invited from the hemisphere and Europe, as well as the organization of three working groups. These discussions provided the basis for the formulation of a list of policy and action recommendations that might be put into effect in the short and medium terms.

The third stage consisted in the elaboration of this report. The report constitutes a prospective analysis drawing upon the themes that were covered at the conference. Our objective is to disseminate the report as widely as possible with the goal of promoting a broad debate concerning: the new international context; the risks, threat, and vulnerabilities that exist in the region; and the role open to civil society in the promotion of a peaceful resolution of conflicts at the local, national, and international levels.



In the following pages we present the principle results of the reflection expressed in the course of the debate and in the papers presented at the conference. The organizers of the conference assume full responsibility for this summary.

The coordinators of this work especially thank each of the persons who actively participated in the presentation of documents and in the debates on the points that are reflected in these pages. We hope that this material will serve to enrich efforts in other regions of the world to promote the same ends. We consider the opening up of spaces for reflection, coordinating initiatives, and the promotion of an agenda for peace in the world to be vitally important. We hope that this work will be a modest, yet significant, contribution in this direction.

Francisco Rojas Aravena  
Director FLACSO-Chile

Claudio Fuentes  
Project Coordinator

## I. The new context of international security

The beginning of the new millennium coincided with an important transformation in international relations in the area of security. These changes are associated with, first, a change in the U.S. strategy of containment beginning in the year 2000; second, the recognition that international terrorism is a global threat; and, third, the explicit emergence of tensions among the principal world powers in regards to how to confront the new challenges of international security.

It is likely that these three phenomena affect the hemisphere in different ways, including an aggravation of conflicts, the militarization of how controversies are solved, and a lesser emphasis on negotiated and multilateral resolution of these conflicts.

### The United States. New tendencies in foreign policy

A first significant event was the change in the foreign policy positions of the United States that began with George W. Bush's arrival in the White House, a change which accelerated in the aftermath of the September 11, 2001 attack.

Historically, U.S. foreign policy has been organized around two objectives: on the one hand, to promote the economic well-being and security of the U.S. population both within the country and abroad; and, on the other hand, to assure the defense of U.S. strategic interests. With the end of the East-West conflict, the United States adopted the promotion of democracy as a priority insofar as the government maintained that

democracy and free markets were two mutually reinforcing phenomena. Additionally, Bill Clinton's government made it a priority to cooperate with the principle centers of power (Europe, Japan, China, and Russia) in order to resolve international economic and security crises. The Bush administration redefined some of the assumptions of the preceding government. These changes have had consequences not only for foreign policy; they have also produced important transformations in the domestic realm (see Box 1).

### The challenges of multilateralism

**José Miguel Insulza**, Vice President of the Republic of Chile.

"The present transformations of the international system are as important as the changes that occurred during the late 1980s with the advent of globalization. The attacks upon the Twin Towers and the capital of the United States were fundamental for reconfiguring international politics. Furthermore, we live in a world in which global political themes acquire ever greater importance in a context of high intra- and extra-national inequality."

"It is in this context that multilateral institutions must be strengthened. Chile, a relatively small country in terms of its population and market, confronts the dilemma that in order to improve its living conditions, it must insert itself in the world. Simply put, the country cannot remain outside global realities."

"Nevertheless, we know that the mode of insertion in multilateral authorities favors the great powers. If the Security Council of the United Nations did not adopt a resolution prior to the war against Iraq it was because the countries that make up the council were not willing to give their vote, a situation which had never before occurred within the institution and which demonstrates that the international system is in a restructuring stage. Thus, the answer to the dilemma of how to participate with a lack of

*Continue in the next page*

power is then to integrate, to broaden globalization, and to participate with the recourses that are available.”

“But this integration should not only be economic; countries should also integrate themselves politically in order to create international regimes that allow countries not only to check the position of the great powers, but also to formulate conditions that allow the medium countries a seat of importance in the international system.”

**Augusto Varas Fernández**, Representative of the Ford Foundation for the Andean Region and the Southern Cone.

“Philanthropic institutions have a triple responsibility: before taxpayers who pay their taxes; before governments that allow tax exemptions; and before recipients who should receive support on objective bases for ends of social welfare, not private welfare nor profit. With this responsibility as a premise, we observe today that peace is one of the principal public goods threatened in the Latin American region. In a region where deaths resulting from political violence produce appalling statistics, advocacy of the rule of law and upholding the force of international humanitarian law, while clarifying the responsibility of all of the actors involved, is an imperative duty that the Ford Foundation has not and will not stand apart from.”

“As Susan V. Berresford, the president of the Ford Foundation, notes, ‘we believe that the best way to confront this challenge is to promote the initiative of those who live alongside the problems; to promote collaboration among NGOs, the government, and the private sector; to assure participation at all levels of society, of men and women, of diverse groups and communities. In accordance with our experience, these activities help to construct mutual understanding, develop excellence, and permit people to better their lives and communities.’ For these reasons, one of the priorities presently established by the Ford Foundation in Latin America is the prevention and peaceful solution of conflicts in the region. Only the joint action of politicians, businessmen, academics, governments, social leaders, and human rights activists may lead us closer to peace and assure that peace is enduring.”

**Francisco Rojas Aravena**, Director of FLACSO-Chile

“This conference brings us together to analyze this new global context, to discuss the role of multilateral organisms in the resolution of controversies, and even more importantly, to debate how strategies for the promotion of a pro-peace agenda in the hemisphere can be imagined from civil society. Today, more than ever, the international context is everyday effecting our lives.”

“The intensification of fumigation in Colombia has stimulated the cultivation of coca in Bolivia and Peru, which surely will increase narcotics trafficking in Argen-

In regards to international policy, the Bush administration adopted a critical stance towards China and Russia, viewing them as “strategic competitors” rather than “strategic allies” as they had been considered by the preceding Democratic government. Additionally, the Bush administration decided to withdraw from a number of international agreements regarding arms proliferation and the prosecution of officials for crimes against humanity.

The September 11, 2001 terrorist attacks contributed to reinforcing the strategic foreign policy postures already noted. These positions were made explicit in The National Security Strategy of the United States of America (September 2002) and the National Strategy for Combating Global Terrorism (February 2003).

The new strategy of national security defined three threats that the United States must be prepared to face: international terrorism, weapons of mass destruction, and the existence of “rogue states” that aspire to threaten the international system by acquiring and using weapons of mass destruction. Although few people dispute the existence and seriousness of these threats, problems arise when we analyze the means and strategies that the United States has selected to confront them. Three axes define U.S. policy options: a foreign policy agenda centered on security themes, the fostering of flexible coalitions, and the promotion of preventive actions to confront these threats.

**FOREIGN POLICY AND SECURITY.** The September 11, 2001 attack reordered the priorities of the first world power, which established an agenda that placed security issues at the center of its concerns. One of the first trends that arises with this new ranking of priorities is the United State's conditioning of economic and military aid upon support from the

tina, Brazil, Chile and Paraguay. This is only one example of the complex interdependencies that we presently experience on the continent. Our research demonstrates that governments in the region have reacted in a fragmentary manner to the new challenges imposed by the new international context. Today more than ever concerted, coordinated, and proactive actions are needed. We need clear leadership from our governments that promotes a cooperative agenda in a hemisphere that has much experience in peacefully resolving conflicts."

"Civil society can and must play a fundamental role both in monitoring the actions of their governments, as well as in the promotion of specific central themes in the international realm. Presently, we need actors who are capable of alerting the citizenry, of developing imaginative proposals, and of promoting solutions for the complex problems that the region faces."

developing countries for U.S. strategic objectives in the area of security and strategic questions.

This conditioning is the source of other fears of the developing countries. These concerns refer to the increased bent towards using military means as the foremost and sole method of resolving international conflicts. This trend reduces the room for maneuver of those states that seek non-armed solutions to complex problems such as drug trafficking and even terrorism itself. The White House position that you "don't negotiate with terrorists" poses a serious dilemma for the Colombian government, for example, since a non-negotiated solution in the country does not appear possible in the short term.

**FLEXIBLE COALITIONS VS. MULTILATERAL INSTITUTIONS.** The Bush government's principal strategy for achieving its security objectives involves the construction of flexible coalitions, that is, ad hoc alliances that allow the United States to consolidate its international policies and give them some form of legitimacy in the short term, even though these policies are rejected by the principal international actors and institutions.

The Bush government has emphasized a new type of world leadership. The construction of alliances could not be carried out through the traditional international organisms (whether they be NATO or the United Nations) but through alliances that adequately respond to the changes in U.S. policy and responses to the post September 11, 2001 world.

**PREVENTIVE WAR.** The new strategy of projecting U.S. global power maintains that the concept of containment worked well in a world with two superpowers and that, in this context, the balance of powers was maintained in so far as both superpowers were capable of responding immediately before an attack with weapons of mass destruction. Nevertheless, in the United States' judgment in the new context "rogue states" and terrorist groups are willing to use any means available to them to effect the international system, including harming civilian populations and violating the fundamental concepts of traditional war.

### Box 1 Protection of civil rights in the United States. The role of NGOs

After two years of 9/11/01, measures taken by the Bush administration has addressed national security concerns over the protection of basic civil rights, as the Patriot Act shows. Such bill was passed by Congress few months after 11/9. According to the American Civil Liberties Union (ACLU) this Act has had four consequences:

a) **Increasing secret trials.** Few days after the 2001 terrorist attack, the government detained more than a thousand people, mostly immigrants from Arab and South East countries. The Department of Justice denied providing the identity of detainees and decided to maintain prosecutions in secret. Many immigrants were arrested for months without legal charges. Most detainees were not connected to terrorist groups.

*Continue in the next page*

**b) Limits to rights of privacy.** Under the new legislation, the FBI can obtain a wide range of private information from citizens including financial records, health records, hotel receipts, library books checkout records, etc. Additionally, the government has developed programs to gather and cross check information.

**c) Weakening of due process.** The U.S. government has weakened rules of due process as it has detained citizens that are classified as “war enemies”. This includes the prosecution of American citizens without having access to a lawyer. On the other hand, more than six hundred non-American citizens were arrested and held in the Guantanamo naval base charged of being related to terrorist activities. The U.S. has not either made charges against them or recognized them as prisoners of war as the Geneva Convention states.

**d) Erosion of balance of power.** The Bush administration has attempted to limit the power of Congress and the judiciary to control Executive decisions. The government has argued reasons of national security to avoid being subject of accountability by the other two branches of the government.

The main non-governmental organizations, and mainly ACLU, has developed several strategies to cope with the government's initiatives that undermine civil liberties.

In terms of judicial strategies, the ACLU has contested the government's practices, claiming the need for due process. The ACLU has obtained some favorable outcomes. Moreover, the ACLU has played an important role in organizing educational campaigns that include the organization of public meetings, workshops and the use of mass media to transmit a message that the organizations has defined as “security with freedom.”

As a result of this campaign, 152 communities of 27 states in the U.S. have promulgated local resolutions supporting the notion of “security with freedom.” Additionally, organizations affiliated to ACLU have sent letters to Congress protesting against the measures that are undermining citizens' rights. One of the main effects of ACLU's strategy was the rejection of Congress at the beginning of 2003 to approve fundings for the full information act promoted by the U.S. Department of Defense.

Given that the risk of waiting is higher than that of attack, the new U.S. strategy maintains that anticipatory measures are required to defend the country from a potential aggression. The idea of a preventive attack is based upon the idea that the United States cannot allow its enemies to effect the first blow. It is maintained that preventive attacks will be subject to a case by case evaluation. With the objective of supporting the decision regarding when to act, the lines of the new strategy include: increasing intelligence capabilities, coordinating actions with allies, and transforming the armed forces for a timely and prompt response to threats that arise on different stages of the planet. According to the national security doctrine, “The greater the threat, the greater is the risk of inaction-and the more compelling the case for taking anticipatory action to defend ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy's attack ... the United States will, if necessary, act preemptively.”

This new orientation has important consequences for the international system. First, the doctrine of preventive attacks questions basic concepts of international law. This change not only alters the rules of the game established by the United Nations; it also can have grave effects on civilian populations, as well as increasing global tension. Second, this doctrine consolidates the unilateral vision of the United States and leads to greater isolation. Third, the new doctrine does not set forth a design for order or legality to be constructed or reaffirmed. A unilateral vision that reaffirms preventive and offensive action will tend to destabilize the international system with grave consequences for all states, especially the weakest ones. Finally, this strategy is crystallizing as a permanent and lone instrument of international political action.

## Terrorism: A global threat

One of the principal effects of the attacks perpetrated on September 11, 2001 was international recognition that terrorism is a problem on a global scale. The magnitude of the attack and the principal power's incapacity to prevent it have obliged countries to reformulate a series of questions regarding the causes of these types of attacks and mechanisms to prevent them. Although international terrorism has existed for decades, this attack demonstrated the need to consider how to confront actors who are organized outside of traditional state structures, have acquired lethal destructive capabilities, act undercover, are convinced of struggling until the final consequences, and are preparing to attack civil and military objectives.

This reality imposes upon the international community the need to coordinate information and policies of prevention and to peacefully resolve

conflicts. This type of response also presupposes a basic consensus on the rules that should guide the actions of states in controlling this scourge. Confronting international terrorism is certainly a serious dilemma in that it requires high levels of consensus and coordination but not all countries are willing to have certain ways of facing the problem imposed upon them, particularly in a unipolar world. The post September 11 experience demonstrates that it is not easy to establish consensus on what constitutes the most adequate ways to prevent terrorist attacks.

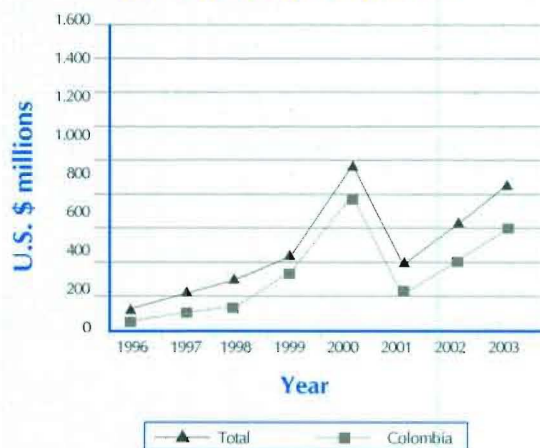
## Multilateralism put to the test

A third element that arose with particular notoriety after the attacks on the United States was the debate on the efficiency of multilateral organizations (for example, the United Nations) in confronting the new

### Box 2 U.S. military aid to Latin America

The United States has been progressively increasing its military and police aid to Latin American countries. Since 1996 one observes a growing trend towards cooperation on military and police materiel, with the exception a considerable drop in 2001. In any case, in the last years tend to mark an accelerated increase, and it is expected that in 2004 the United States will contribute to the region a figure higher than a thousand million dollars, particularly to Colombia, which receives most of the total budget assigned. This increase is explained by the implementation of the Plan Colombia. It is estimated that of the nearly nine hundred million dollars that will be contributed in 2003 for all of the region six hundred million will go to Colombia. That is, Colombia represents two-thirds of all aid to the region.

U. S. military assistance to Latin America, 1996-2003



Source: Latin American Working Group Education Fund. Paint by Numbers, August 2003.

threats and on the decision making structures of these organizations which do not take into account the new balance of world power.

**INSTITUTIONAL EFFICIENCY.** A first part of the debate concerns the efficiency of international organizations in rapidly and efficaciously responding to situations. According to some analysts, some organizations such as the United Nations - at the global level - and the Organization of American States (OAS) - at the hemispheric level - need to be redesigned, modernized, and reformulated to respond to a more dynamic, changing international context in which threats to stability arise from unforeseeable places.

It is maintained that these international organizations have generated high levels of bureaucracy, becoming distanced from the reality of conflicts. Thus, debureaucratization and the setting of new organizational priorities is required.

Precisely these problems have led the U.N. General Assembly to seek mechanisms to improve the capacity for multilateral response before an international security crisis. This debate is manifest in attempts to improve coordination among different multilateral entities and to strengthen the power of the U. N. Secretary General to take certain decisions. A special panel in the organization is debating ways to improve efficiency and will present its findings to the General Assembly of 2004.

**BALANCE OF POWER AND INTERNATIONAL COOPERATION.** Nevertheless, the problem of efficiency is intimately linked to the power relations within multilateral organisms, especially at the heart of the United Nations. The composition of the Security Council and its resolution mechanism reflect the distribution of powers that characterized the start of the Cold War.

Over half a century after the creation of the United Nations the world has undergone profound changes. The United States is the principal economic and military power and it has the capacity, and in some cases the will, to act outside of the U. N. framework. Additionally, as a result of the process of economic interdependency problems of international security are no longer merely a matter of concern and deliberation within the most developed countries but also effect the developing countries. Thus, one of the recurrent themes in the debates on global security points to the need to incorporate new members to the U. N. Security Council, as well as to modify the system of decision-making to make it more operative. Excluding China, the remaining members of the Security Council represent 8 percent of the world population.

The worst scenario in the present global conjuncture would combine an international community that does not react opportunely to international crises, international institutions that are surpassed by power conflicts among the big powers, and powerful states that violate basic principles of coexistence and respect for international law without any sanction from the international system.

## II. Latin America, a peaceful but vulnerable region

In Latin America inter-state tensions are rare, and when they have occurred they have tended to be resolved in non-violent ways. Nevertheless, it is worth noting that at the beginning of the twenty-first century there stand sixteen unresolved interstate disagreement and during the 1990s military force was used on seventeen occasions, leading only once to a situation of war (Ecuador-Peru).

Additionally the recent experience in Latin America and the Caribbean reveals that there has existed capacity for mediation and concertation which has manifested itself in situations of democratic governability crises (Paraguay 1994, Bolivia 2003) and inter-state crisis (Ecuador-Peru conflict 1995). Less formal instances, such as “support groups” or the Group of Rio, have demonstrated themselves to be efficient means towards regional consensus. The former have generated a “complex multilateralism”, that is a series of arenas for informal negotiation among countries which operate with a rhythm distinct from more traditional or institutionalized arenas, such as the OAS (see Box 3).

Nevertheless, as will be seen below, there subsist long standing conflicts in the region, such as the conflict in Colombia that have implications for all of the region.

### Principal vulnerabilities

In the first years of the 1980s the longest cycle of democratization in the history of the region began. Nevertheless, serious problems of economic, social, and political development subsist that make the region vulnerable. The principal vulnerabilities of the region are:

a) **WEAK DEMOCRATIC INSTITUTIONS.** Although almost every country in the region has an elected government, in some cases the quality of democratic institutions is seriously in question. Generally, we observe unacceptable levels of corruption, low levels of transparency in regards to matters of public interest, and low respect for the essential rights of persons. In terms of international standards, fewer than five Latin American and Caribbean countries are characterized as democracies that fully respect civil liberties.

b) **REPRESENTATION CRISIS OR INSTITUTIONS.** In addition to the existence of weak institutions, we also observe that institutions such as political parties and congress lack legitimacy before society as intermediaries for advancing social demands. The representation crisis of these institutions tends to favor the rise of populisms and governments that end up with very low levels of citizen support.

c) **INCREASING LEVELS OF POVERTY.** It is significant that after nearly two decades of structural reforms liberalizing markets the problem of poverty still has not been resolved. While in 1980 40 percent of the population lived below the poverty line, today that group rises to 43 percent (over 220 million people). During the same period levels of indigence have remained practically unaltered (20 percent of the Latin American population lives in extreme poverty). Nine countries have levels of poverty greater than 50 percent: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, and Peru.



**Box 3**

**Experiences with multilateral resolution of conflicts in Latin America.**

**Contadora Group**

The Contadora Group was formed in May 1983 by Colombia, Mexico, Panama and Venezuela. Its principal objective was to develop Latin American proposals to solve Latin American problems, in particular the political-military conflicts in Central America. Its two principal achievements were to prevent military intervention by the powers in Central America and the elaboration of the Contadora Act, which established norms for coexistence in this region wrought by economic crises, polarization, and intervention. Later Argentina, Brazil, Chile and Peru were incorporated, thus establishing the so-called Group of Eight; once Bolivia; once Paraguay, Uruguay, and a representative each for Central America and the British Caribbean joined, this forum became the Group of Rio.

**Group of Rio**

This Group of Rio is today made up of Mexico, all of the Central and South American countries, the Dominican Republic, and one country which represents the English-speaking Caribbean. Since 1987, the group's leaders meet annually to consider international and regional matters, and their positions have often served as sources of early alert. This occurred, for example, in Costa Rica during the sixteenth summit when the leaders made harsh declarations concerning events occurring simultaneously in Venezuela, where a coup d'etat against the constitutional president, Hugo Chavez, separated him from office for a few hours between April 11 and 12, 2002.

**El Salvador and the Group of Friends of the Secretary-General**

The bloody civil war in this Central American country placed this conflict within the realm of action of the United Nations. Once the confrontation between the Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Farabundo Martí National Liberation Front) and the government of El Salvador worsened, then Secretary-General of the United Nations, Javier Pérez de Cuellar convoked Colombia, Spain, Mexico and Venezuela to integrate the Group of Friends and help him achieve a successful mediation. After various years of arduous work, the Group of Friends of the Secretary-General managed to get the parties to commit to the Peace Accords signed in Chapultepec Castle on January 16, 1992. The United Nations initiated a peacekeeping operation, the United Nations Observer Mission in El Salvador (ONUSAL).

**Guatemala and the Group of Friends of the peace process**

This group, composed of Colombia, Spain, the United States, Mexico, Norway and Venezuela, was formed in 1993. In contrast to El Salvador the Group of Friends of the Guatemala peace process never sought to become a negotiating body. The groups work alongside the United Nations and the parties to the conflict was possible precisely because of the non-negotiating character of the group. In this way, once bridges were built with the support of the Group, the representation of the Secretary-General of the United Nations could assume a relevant mediating role. Finally, on December 29, 1996 in Guatemala City the government and the Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG, Guatemalan National Revolutionary Unity) signed the Firm and Lasting Peace Accords, and the United Nations deployed a peacekeeping force, the United Nations Verification Mission in Guatemala (MINUGUA).

d) **INCREASING LEVELS OF SOCIOECONOMIC INEQUALITY.** Latin America and the Caribbean are the most unequal regions on the planet, a situation which seriously effects possibilities for development and stability. First, the concentration of economic power in the hands of a few inhibits redistributive policies in so far as the most advantaged sectors of society are unwilling to sacrifice part of their profits. Second, since the capacity for collecting taxes is low, the poorest are the sectors most effected by the lack of access to basic state services (education, health, social benefits). This combination produces a vicious circle in which the poor remain in conditions of poverty while the wealthier enjoy access to higher quality, private services. Additionally, the social gap between rich and poor tends to widen, generating high levels of social conflict.

e) **SOCIAL DESINTEGRATION.** High levels of poverty linked with the weakness of democratic institutions seriously effect the social integration of traditionally excluded sectors who suffer high levels of discrimination. In Latin America and the Caribbean particularly vulnerable sectors are ethnic groups, persons of African descent, women, youth, the elderly, and immigrants.

f) **VIOLENCE AND URBAN CRIME.** As a result of the preceding conditions, high rates of violence and urban crime are observed in the principal cities of each country. This violence and crime has been associated with high levels of drug consumption, trafficking of light arms, and illegal activities. The phenomenon of the creation of ghettos, urban spaces controlled by drug traffickers in which the State faces serious difficulties in maintaining the rule of law, is common in many Latin American cities.

In summary, Latin America has a tradition of peacefully resolving interstate conflicts. From a national point of view we observe increasing social tensions that are the product of economic inequalities and the weakness of regional institutions in responding to these internal conflicts.

### III. Regional crisis and conflict resolution

Presently, there exist three foci of conflictivity in the region.

#### ● CONFLICT LINKED TO THE COLOMBIAN SITUATION (ANDEAN REGION).

Colombia faces a situation of internal violence that has gone on for over four decades. This situation combines social and political-historical conflicts with the more recent development of the cultivation of coca. It is a complex conflict that includes historically postponed peasant demands, the cold war context, the influence of the Cuban revolution, the emergence of guerilla groups during the 1960s, the articulation of self-defense forces (paramilitaries) by some internal power groups, and, more recently, the appearance of the phenomena of drug trafficking. Brazil, Ecuador, Panama, Peru and Venezuela have been increasingly effected on their borders with the expansion of this conflict.

Additionally, the fumigation policy applied in Colombia during the last five years has significantly reduced the number of hectares planted with coca, but at the same time has increased pressure to augment production in Bolivia and Peru. In 2002, while Colombia reduced the cultivation of coca by 45 percent in Bolivia production increased by 23 percent and in Peru by 8 percent.

#### ● CONFLICT DERIVED FROM HIGH LEVELS OF STRUCTURAL POVERTY.

In the region there are countries with high levels of structural poverty where over 50 percent of the population lives in poverty, levels which have persisted for decades (and in some cases centuries) without being resolved. In terms of the Index of Human Development of the United Nations Development Program (UNDP), the seven most vulnerable countries in the region are, in order of vulnerability: Haiti, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia, El Salvador, Ecuador and Paraguay. Among the factors shared by these countries are a high percentage of native peoples, the precariousness of democratic political institutions, and a historical lack of support for democracy.

#### ● SOCIO-POLITICAL CONFLICTS IN COUNTRIES WITH MEDIUM LEVELS OF DEVELOPMENT.

Argentina and Venezuela are two cases of countries that have medium levels of development but where a deterioration of democratic institutions can be observed. This deterioration is manifest in high levels of fragmentation and a crisis of representation of the traditional political parties, unacceptable levels of corruption, and a rapid increase in levels of poverty in the past decade.

## The poorest countries of Latin America and the Caribbean Socioeconomic statistics

Country	Ranking Human Development Index	Poverty (2001) %	Life Expectancy at birth (2001) %	Adult literacy rate (2001) %	Per capita GDP (2001)
Haiti	150	n.a.	49,1	50,8	1.860
Nicaragua	121	67,4	69,1	66,8	2.450
Guatemala	119	60,4	65,3	69,2	4.400
Honduras	115	79,1	68,8	75,6	2.830
Bolivia	114	61,2	63,3	86,0	2.300
El Salvador	105	49,9	70,4	79,2	5.260
Ecuador	97	60,2	70,5	91,8	3.280
Paraguay	84	n.a.	70,5	93,5	3.840

Source: United Nations Human Development Report 2003. For levels of poverty, see ECLAC, Social Panorama of America 2001-2002. N.a.: not available.

The comparative analysis of crisis situations and conflicts allows us to observe three latent risks:

### 1.- Preferential Reliance on a Military Response to the Colombian Conflict and Situations Linked to the Drug Trade

The U. S. aid package to Colombia approved in the late 1990s included a strong military component. After the September 11, 2001 attacks, the strategy used by the Colombian government - and supported by the United States - combines the eradication of coca crops, the intensification of the military offensive against the guerrilla, and an increase on the prohibition of drugs.

The preceding has translated into a systematic increase in violence which is evidenced in the increase in the number of terrorist attacks, civilian deaths, and kidnappings. While in 1996 there were 1,608 kidnappings, in 2002 the number was close to three thousand. The number of victims due to the conflict doubled in the period between 1996-1998 and 2000-

2002. Additionally, there was a systematic rise in the number of terrorist attacks during the period 1996-2002 (see Box 4).

The eradication of coca cultivations in Colombia led to a reduction of nearly 50 thousand hectares under cultivation between 1999 and 2002. Nevertheless, the contraction of cultivations in Colombia was matched by an equivalent increase in coca production in Bolivia and Peru. This effect expands the drug trafficking problem and creates tensions in countries where apparent advances in the use of alternative cultivations had been observed. In other words, pressures to eradicate coca lead to a displacement of production to other countries within and outside of the region.

The intensification of the military conflict entails a spiral effect involving an increase in money laundering, contraband of merchandise and trafficking in arms, munitions, and chemical precursors. The increase in the circulation of heavy and light weapons contributes to exacerbate the use of violent means for the resolution of social conflicts.

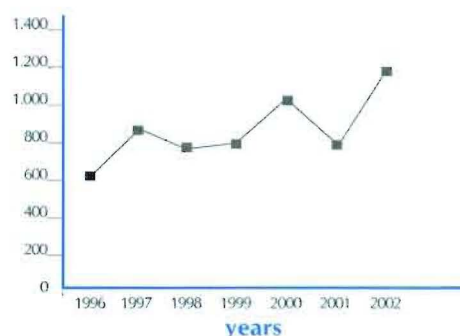
The U. S. policy on drug trafficking tends to promote a resolution of the issue via military action. Since September 2001 this conception has been reinforced as drug trafficking has been linked directly with terrorist activities at a world scale. In the U. S. National Security Strategy an explicit warning is made regarding the need to combat the interdependence between drug trafficking and illegal armed groups. In October 2001, the U.S. government included the Colombian paramilitaries (United Self-Defense Forces of Colombia, AUC), the Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army, ELN) and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC) in the category of terrorist organizations. This decision had important bureaucratic implications in the United States, as it made it possible to dedicate new funds for the antiterrorist struggle to the Colombian case. Since October 2002 restrictions were lifted that prohibited the use of such funds to protect the petroleum infrastructure and to combat non-state armed groups in Colombia.

In other sub regions such as Central America, particularly in El Salvador, Guatemala and Nicaragua, we observe a growing trend since 2000 to align foreign policy agendas with the United States on security matters. In addition to signing free trade agreements, commitments have been established to carry out joint patrols in the maritime corridors between the United States and the Central American countries to control terrorism, illegal migration into the United States, and drug trafficking. Additionally, agreements have been signed between the Department of Defense and the armed forces of El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua to increase levels of institutional coordination, broaden training programs, update equipment, and improve the capacity to combat terrorism.

#### Box 4 Colombia: trends in a regional conflict

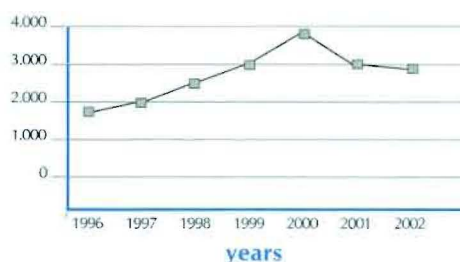
During the last decade terrorist actions have escalated in Colombia, levels of violence have increased, and the conflict has expanded to neighboring countries. The greatest number of kidnappings in the world occur in Colombia. Over 50% are attributed to the FARC and the ELN. Massacres and homicides are associated with the actions of the self-defense groups and the guerrillas. As a result of the drug industry 3,000 persons die a year. Eleven thousand child soldiers fight in the armed groups, of these 80% are in the FARC and the ELN and the remaining 20% are in the AUC. Some 84.78% of the violations of international humanitarian law are committed by the subversive organizations, 13.39% by the self defense groups and 1.98% by the public forces.

#### Terrorist attacks in Colombia, 1996 - 2002



Another way to analyze the escalation of violence in Colombia is to consider the number of kidnappings; kidnappings rose sharply and constantly through 2000 and then stabilized at around three thousand kidnappings a year.

#### Kidnappings in Colombia



Fuente: Dirección de Policía Judicial e Investigación, Departamento nacional de planificación, República de Colombia, 2003. [www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

## 2.- USE OF FORCE IN INTERNAL CONFLICTS

A second risk in the region is associated with the tendency of democratic governments to use force, with ever increasing frequency, to resolve internal social conflicts. On average, in Latin America and the Caribbean 43 percent of the population live below the poverty line. The rise in crime and delinquency and the increased social tensions provoke a particularly conflictive scenario before which governmental authorities tend to use legal mechanisms such as the states of emergency and siege to control these conflicts.

The search for solutions for this problem is complex as a number of incentives favor repressive responses. First, in many countries public opinion is inclined towards "hard line" solutions to put an end to the problem of delinquency, criminality, and social conflicts. Second, democratic authorities reveal themselves to be receptive to applying solutions that are publicly highly visible, such as the application of states of emergency, the broadening of police powers to control social conflicts, and increases in resources for security organisms - measures that are perceived by the citizenry as an immediate "solution" to the problem. Finally, in the majority of the countries in the region mechanisms to control the internal operation of the security forces are practically nonexistent. Thus, while the government needs police forces to control public order, civil authorities do not possess all the legal instruments, technical capacities, nor, on some occasions, the political will to assess whether police actions conform with the rule of law.

An illustrative example is the situation in Argentina. Since the beginnings of the 1990s human rights organizations have systematically denounced constant

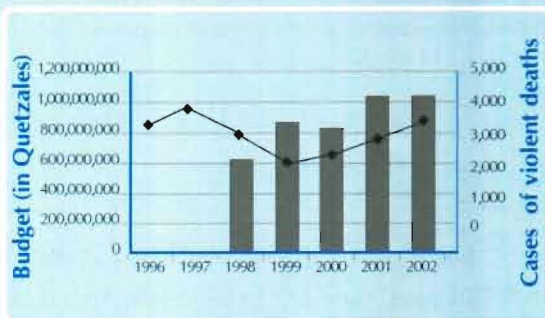
### Box 5

#### Guatemala: a vulnerable country

It has been almost eight years since the Government of Guatemala and the guerrilla forces signed the peace accords that put an end to over thirty-five years of authoritarian governments. Since December 1996, this pact allowed the election of a civilian president and the establishment of a system which to date has been incapable of responding to social demands for greater equality, transparency, justice, and democracy.

In the area of security, the peace agreements implied a completely new scheme for the armed forces, which traditionally had enjoyed a broad range of prerogatives and independence. The creation of the National Civil Police (PNC) presupposed not only a step towards democratization but also greater security, which, however, is far from having been reached in practice. During just the period of the present president, Alfonso Portillo, over 12,500 violent deaths have been registered, a number higher than the 10,333 deaths that occurred during the presidency of Álvaro Arzú in the 1996-2000 period.

#### Guatemala: PNC budget and violent deaths



Source: United Nations Verification Mission in Guatemala (MINUGUA).

Although the creation of the Civil Police has reduced military involvement in internal security matters, an increased budget for the police has not meant a reduction in insecurity. Almost 80% of the budget goes to paying the salaries of agents and the lack of inputs and basic materials such as gasoline for the police cars is evident at police stations.

The unsatisfied need for effecting justice for acts of violence has stimulated the practice of spontaneous and planned popular lynchings, acts of extreme violence which on many occasions are carried out by police agents themselves and which seriously question governability. According to Amnesty International, 97% of the cases of lynching have not been carried to

*Continue in the next page*

justice. Between 1996 and 2001 a total of 738 victims were counted; 200 of whom were killed (Minugua, Crónicas de Minugua, No 37, 2001).

The authority's lack of will authorities to sanction individuals who commit crimes and human rights violations increases the sense of insecurity in a country that requires a substantial improvement in the quality of life of its citizens and that needs to fulfill the goals established in the peace accords.

police abuses. Thousands of cases have been documented of abuse of force, corruption scandals, "easy trigger", use of institutional resources for illegal ends, police participation in drug trafficking rings, sale of illegal cars, and kidnappings. These situations have produced serious attempts by the government in the mid 1990s to transform the structure of the police in the Province of Buenos Aires, but these changes were truncated by institutional resistance by the police itself, political sectors, and the subsequent economic crisis.

Although public opinion evaluates the police negatively, when the same persons are asked if they would give greater powers to the security forces to fight delinquency and violence, nearly 50 percent respond affirmatively. The efforts of different governments to reform the police have been unsuccessful primarily because of resistance from the police institutions and power groups in the political system.

In this way, the processes of democratization have not implied an automatic adaptation of the armed institutions and the forces of order to a new reality in which the rule of law reigns. A culture of violence permeates institutions in many cases, including Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haiti and Venezuela, among others (see Boxes 5 and 6).

### 3.- Extra Constitutional Solutions for the Legitimacy Crisis

Another phenomenon that has become a habitual practice in the region is the search for extra constitutional solutions to the legitimacy crisis of democratic governments. In comparison with previous decades, the absence of coups d'etat headed by the armed forces is an important and favorable change. Despite severe sociopolitical crises in Argentina (2001), Brazil (1992), Ecuador (1997), Guatemala (1997), Paraguay (1994-1995), Peru (1992, 2000) and Venezuela (1992, 2002), the result was the solution of these conflicts within the framework of democratic standards.

Three factors may explain this new situation in the region. First, the existence of a community of democratic countries in the hemisphere that have pressured for the maintenance of democratic systems and have elaborated a series of international agreements and commitments to protect democracy. Second, the legitimacy crisis of the armed forces themselves in various countries in the hemisphere. Finally, the absence of major ideological disputes among the leading elites in the respective countries, a factor which has reduced incentives to manipulate the armed forces for particular ends.

Although the resolution of crises without the establishment of military regimes is a positive fact, the consistent delegitimation of democratic procedures to resolve internal conflicts is one of the negative factors in this new situation, indicating a weakening of the institutions that sustain democratic regimes in the region. Governability crises tend to be resolved with the resignation of presidents, the abolition of constitutions, and the promulgation of new rules of the game. These new rules in turn are also called

into question if they do not fulfill the expectations of some sectors of society. Thus, the instability of governments affects citizen's trust in democracy, while non-constitutional solutions routinely delegitimize political actions.

### Box 6

#### Haiti and Bolivia: highly vulnerable countries

**Haiti** is the poorest country in Latin America and the Caribbean. Over 80% of the country's 7.5 million inhabitants live below the poverty line, and according to FAO data everyday some 3.8 millions inhabitants go hungry. The country's constant social and political instability has contributed to deepening a humanitarian crisis that has existed in Haiti for various decades. Life expectancy at birth is only fifty two years, and annually about 30,000 persons die from AIDS. Illiteracy and the human development index situate Haiti among the poorest countries on the planet.

In the past, the deep political instability generated a large number of illegal emigrants, mainly towards the United States, and it is feared that this situation will repeat itself and provoke a serious problem for North American security. In contrast to the Cuban boat people who enjoy a right to asylum when they arrive in the United States, Haitians are detained and repatriated to their origin.

Compounding these realities are the problems generated by drug trafficking, money laundering, arms trafficking, and illegal reproduction of products, which together generate a high level of insecurity among the population. Overall, the possibility of greater social instability constitutes a certain threat for the region, above all for Haiti's neighbor, the Dominican Republic. An "electoral authoritarian democracy" has been created with electoral fraud and human and political rights violations. The threats to governability, extreme poverty, marginality, disease, and illiteracy, among many other problems, must situate Haiti at the top of the list of priorities of international organs seeking to protect the human rights of a population that has suffered from neglect and misery for years. This is particularly important after the most recent crisis of February 2004 where president Aristide left Haiti and a provisional government took office.

**Bolivia** is the poorest country in South America. Six of every ten Bolivians live in poverty or extreme poverty - the average income is less than two dollars a day. In rural areas, nine out of every ten peasants are poor or indigent. Some 60% of Bolivia's 8 million some population are indigenous people; the majority of them live in terrible social conditions in the countryside or in suburban zones. Additionally, Bolivia has a fragile economy. For four years Bolivia has experienced low growth with the GDP expanding only 2% in 2002. The social and political crisis has given rise to capital flight, which, along with negative export performance, worsened the current account deficit and the balance of payments. At the beginning of 2003, the fiscal deficit was 8.5% and in recent years the trade deficit has fluctuated between U.S. \$ 300 and 500 million dollars.

From a political-institutional perspective, Bolivia also confronts serious problems. After a disputed election with Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada assumed the presidency of Bolivia in August 2002. The situation was of such uncertainty that after he received a plurality of votes (22%) in the presidential election, only negotiations and political alliances finally permitted Sánchez de Lozada's ratification in Congress. From the beginning, Sánchez de Lozada depended upon a fragile coalition to confront strong opposition. By international standards, Bolivia has fallen in the indices of corruption from 71st place in the year to 106th place in 2003. On October 17, 2003 President Sánchez de Lozada resigned after broad social mobilizations. The new president, the former vice-president Carlos Mesa, defined his term as a government of transition and set three objectives. These goals, nevertheless, depend upon the establishment of a broad social pact: the installation of a Constituent Assembly, the reform of the Law of Hydrocarbons, and the convocation of a referendum to define a policy for natural gas exports.



## IV. Civil society and the promotion of peace in the hemisphere

### Roles of an organized civil society

Organized civil society can play a significant role in the promotion of peace in the hemisphere and in the resolution of conflicts by peaceful means. Civil society can be involved in three areas of activity.

**a) PROMOTION.** A first dimension refers to the promotion of a culture of peace and tolerance in the resolution of conflicts. Generally, the associated activities are led by base organizations or groups linked to churches, and they involve peaceful techniques of conflict resolution at the local and even national level. The promotion of a culture of peace also implies educational activities, divulgation activates in local communities and among transnational networks that promote respect for human rights.

**b) MONITORING.** A second nuclei of activities concerns the role played by civil society organizations in specific countries or at a hemispheric level in monitoring government actions in the area of protection human rights, strict compliance with national and international law, and the fulfillment of accords reached. Important examples of observer entities at the international level are: Human Rights Watch, the Washington Office on Latin America, the Latin American Working Group Education Fund, Amnesty International, Centro de Estudios Legales and Sociales (Center of Legal and Social Studies, CELS-Argentina), Viva Río (Brazil), and the Instituto de Defensa Legal (Institute of Legal Defense, Peru),

etc. Generally, these monitoring activities imply: (a) documenting cases; (b) systematizing relevant information regarding social conflicts and arms transfers and sales; (c) analyzing tendencies to abuse power; and, (d) tracking international and national legislation. One element which is inseparable from such monitoring of activities is the public character of the work, to which end the development of mechanisms for disseminating the monitoring results are required. The information gathered is useful only in so far as it makes it possible to alert national and international authorities and society as a whole regarding the behavior of governmental authorities.

**c) IMPLEMENTATION.** A third nucleus of activities involves the participation of civil society in putting into effect certain state policies. One of the most emblematic cases in the region is the role that a large number of base organizations and activists played in the implementation of pacification policies in Central America after decades of civil war.

### New international scenario and civil society

The action of civil society in the prevention of conflicts and the promotion of peace is mediated by: (a) the growing role that civil society assumes in a new social framework, (b) the diverse nature of the problem, and (c) the different levels at which the problem of conflict is manifest.



a) **INCREASED DEMANDS.** In the present regional and international scenario - as described in this report - there are increased pressures upon organized civil society to act and to exercise influence before governments and international organisms. This occurs for four reasons. First, in the majority of the Latin American countries traditional political parties suffer a deep crisis of representation. Given that the society does not perceive the political parties as adequate channels for carrying their social demands to the authorities, civil society organizations acquire an unprecedented principal role. Peru has been a paradigmatic case, where after the crisis of the Fujimori government the most respected institutions have been precisely civil society organizations.

Second, in some cases the governments themselves have stimulated the participation of organized civil society given that its participation grants legitimacy to the governments. This trend has generated a constant flow of personnel from non-governmental organizations towards the field of public action.

Third, as internal problems are ever more related with U.S. policy, in some countries of the hemisphere civil society organization have increasingly linked themselves with hemispheric and international organisms. The fight against drug trafficking is one example of this situation. Because it is a conflict that involves the United States, the actions of organized civil society attain greater relevance and impact when they are part of coalitions or networks of organizations. These activities have increased the legitimacy of actions by transnational civil society, which at the same time increases the demands for total solutions with the participation of these networks in the resolution of conflicts.

Fourth, academics, foundations and international cooperation and financing agencies have stimulated the strengthening of organized civil society as a central part of democratic consolidation. This commitment implies recognition for the work of thousands of activists in the hemisphere, but at the same time it implies an increased demand upon these organizations to control and monitor activities associated with the public interest.

b) **DIVERSE NATURE OF THE PROBLEM.** The promotion of peace has diverse dimensions or facets that are often intertwined even though social actors in a specific country do not always perceive these connections. One of the most evident dimensions is the promotion of peace in conflict situations. In this regard, the Colombian case is presently the clearest case in the region. In this case, there is an evident relationship between the policies of the major powers, military support to fulfill certain objectives, the escalation of the conflict, and the consequences that the conflict is having upon the civilian population.

A second dimension is in regions where there is no armed conflict but there are indicators of a greater use of force to resolve social problems. In Central America the United States has pressured to respond militarily to problems such as drug trafficking, immigration, and international crime. Although there has been no armed conflict, the political pressures are rising for a greater use of force in containing problems that certainly require multi-sectoral responses and the concertation among the countries of the hemisphere. In a region where on average the level of poverty exceeds 50 percent of the population and where there is one firearm for every 26 inhabitants, there is a high risk of escalation of social violence.

Another facet related to the promotion of peace in the region concerns social explosions such as recently occurred in Bolivia, where the factors that unleashed the social and political conflict are more complex. The emergence of that conflict superimposed sectoral interests, government decisions regarding the use of natural resources, historically ignored indigenous demands, and U.S. pressure to establish a more aggressive policy to fumigate coca cultivations.

Finally, another dimension of peace promotion revolves around such problems as delinquency and insecurity in the large urban centers. In different cities of the continent, such as Greater Buenos Aires, Lima, Santiago or Rio de Janeiro veritable "fiefdoms" have been established in the slums or favelas that are controlled by drug traffickers and in which the authorities cease to exercise control, at least temporarily. An extreme situation occurred in Rio de Janeiro at the beginning of the 1990s when veritable armies of civilians controlled the terrain in the favelas. This phenomena, without a doubt, refers to a local conflict that is directly related with problems of structural poverty and the incapacity of the state to respond to and solve social problems and to control public order, etc. Nevertheless, there is also an international dimension tied, for example, to the trafficking and sale of drugs as well as illegal arms. Oxfam International, IANSA (International Action Network on Small Arms) and Amnesty International have recently launched a campaign to control arms trafficking in the world after confirming that there is a tight link between light arms production in the developed countries (Austria, the United States, Great Britain) and their commercialization in the developing countries.

In this way, organized civil society is responding to the different dimensions of the problematic of promoting peace, in some cases to confront situations that are directly related to the pacification of a conflict already in course, in other cases to prevent a military escalation, and in others to confront issues related to urban violence at a more local level.

**c) LEVELS OF ACTION.** A third characteristic is that the promotion of peace can occur at different levels, starting from focalized work in a local realm (the promotion of peace in a community), going to more general work at the national level, and ending in a transnational dimension. These levels tend to increasingly interact with greater fluidity thanks to technological advances in communications.

### Collective action difficulties

For some time observers have recognized that one of the principle challenges for social movements and organizations that involve a number of members is the problem of collective action, that is, how to coordinate a variety of agendas, objectives, and interests. Civil societies in Latin America and the Caribbean do not escape this reality and face various problems to effect a greater influence in the realm of promoting peace and the peaceful resolution of conflicts.

**HETEROGENEITY IN THE LEVELS OF ORGANIZATION.** The levels of organization and capacities of civil society on the continent are different. There are highly complex organizational experiences, for example, in Argentina, Brazil, Colombia and even Bolivia, but weaker experiences in countries such as Chile, Ecuador, Honduras and Peru. In regards to the transnational organizations that support work in



the region, the majority are concentrated in the most sensitive countries, presently Colombia, Guatemala and Venezuela.

One of the most recent cases of complex coordination of actions by part of civil society was the World Social Forum which has its headquarters in Porto Alegre, Brazil. Since 2000 each year it has brought together hundreds of organizations and activists around such thematic issues as, among others, democracy, sustainable development, the environment, education, free trade, drug trafficking, civil society, counter-hegemony, culture, equality, global resources, diversity, and war and peace. The forum has had a ripple effect, leading to the rise of subregional and national thematic forums, such as: Asia, Europe, Pan Amazon, Mediterranean, Argentina, Colombia, Spain, Palestine, Quebec, Switzerland, Venezuela and the World Forum on Education.

While Brazil has become a focus of activism around global problems such as the promotion of peace, other countries cannot reach such levels of organization.

**HETEROGENEITY IN THE AGENDAS OF ORGANIZED CIVIL SOCIETY.** Civil society in the region faces another problem in the form of the heterogeneity of its agendas. Thus, there is no single civil society that as a whole demands the peaceful resolution of internal and international controversies. Rather, there exist a series of groups that organize around specific thematic axes and which during certain moments or conjunctures (the beginning of the war against Iraq, for example) reach higher levels of coordination.

In Peru, for example, there are diverse levels of organization focusing on three significant thematic axes: a coalition that coordinates human rights

organizations that have centered their work upon the search for truth and reconciliation as a way to go beyond the recent period of violence in Peru; a coalition of environmental organizations that have assumed greater vitality before projects to invest in the exploitation of Peruvian natural resources; and a coalition of citizen oversight that has focused on the issues of transparency, access to information, and the quality of communications.

This heterogeneity of agendas and, therefore, heterogeneity in the focus of civil society actions is something common to all societies. Given that there is a range of problems, the organizations tend to focus their work on responding to immediate demands.

**ORGANIZED CIVIL SOCIETY AS A SOCIAL REFERENT.** The weakness of the political parties and the crisis of representation of the traditional institutions which previously channeled citizen demands increases the importance of civil society, which in many cases have become a social referent. This has implied that many times nongovernmental organizations assume tasks and functions beyond their specific role in promoting, monitoring, and participating in the implementation of specific policies. From being actors that struggle for certain demands, civil society organizations many times go on to fulfill tasks in the political process itself, acting as mediators before an eventual vacuum of power.

**ORGANIZED CIVIL SOCIETY IS NOT NECESSARILY "NEUTRAL".** Another problem that has arisen from the collective work is that civil society organizations are not always perceived as being "neutral" in the political process. For example, in the Colombian case, civil society organizations that demand a peaceful resolution of conflicts have different

characteristics and, at times, engage in important controversies with each other. In some regions of Colombia the Catholic Church appears as the champion of civil society, while in others nongovernmental and base organizations appear closer to non-traditional parties and armed groups. With more or less difficulty, those organization have made progress in establishing networks, such as the Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (Permanent Assembly of Civil Society for Peace) and Colombia Va (Colombia Goes), among others.

The relationship between “civil society” and the political parties is also problematic. In some cases, the formation of networks of base organization is directly or indirectly tied to specific agendas promoted by political actors that seek to reach social sectors who they otherwise would be unable to access. In other cases, those sectors that do not feel represented by the political parties associated with the acting government at the regional or national level consider themselves to be representatives of an excluded civil society.

**TRANSNATIONAL ARTICULATION IS NOT ALWAYS EASY.** While the work of civil society organizations at the local and transnational level in some specific conjunctures is particularly fruitful, this is not always the case.

In the case of the Iraq war, diverse organizations in different countries of the continent simultaneously coordinated their action. In this case there existed a clear referent (the U. S. intervention in Iraq) which rapidly mobilized heterogeneous groups of organizations around a single objective: the promotion of peace.

Nevertheless, in the everyday work of organizations such coordination is not easy. On

the one hand, local organizations are centered on resolving immediate problems related to their own agendas, usually with scarce resources and an overload of work. On the other hand, the transnational organizations have their own specific agendas and demands (information about particular cases, gathering of information, promotion of global agendas) which at times are not easily incorporated to the daily work of local organizations.

### Successful experiences

In the region there have been some notable experiences in articulating networks, promoting peace in the hemisphere, and establishing conflict resolution mechanisms with the participation of civil society. Nevertheless, their level of “success” must be weighed in terms of their objectives. In some cases, the principal objective was precisely to articulate a network of academic centers and activists around the problem of peace. Others involved networks that sought to influence the process of conflict resolution in course. In some cases, the intention was to contribute to training and education on issues of peace.

Some examples of articulating networks at different levels are:

#### Civil society networks

- Initiatives for peace developed by the Fundación Arias para la Paz and el Progreso Humano en Centroamérica (Arias Foundation for Peace and Human Progress in Central America, 1980-2000).
- Civil society initiative in the resolution of the Central American conflict (1980 on).

- Program to support democratic human security in Central America by the University para la Paz (University for Peace, 2000 on).
- Initiatives by civil society organs around the Andean-Brazilian Security Agenda(2000 on).
- Multiyear Program “Democracy and Human rights in the Andean Community”, composed of the programs in Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela, involving the promotion of human rights in the region (2002-2005).
- Temporary Ad Hoc Commission of Central American Civil Society Security (2000 on).
- Initiatives of the World Social Forum on the promotion of peace (2000 on).

### Academic networks and networks to influence decision-making

- South American Peace Commission (1980 on).
- Latin American Council for Peace Research, CLAIP (1980-1990).
- Latin American Council of Defense and Disarmament, CLADDE (1980-1990).
- Latin American International Relations Program, RIAL (1978-1993).
- Peace and Security in the Americas Program (Woodrow Wilson Center and FLACSO-Chile, 1990 forward).
- CRIES and the European Center for the Prevention of Conflicts Project to study the role of civil society in the prevention of conflicts (2000 forward).
- The Latin American Working Group (Washington D.C.).
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. (Latin American Faculty of the Social Sciences, academic network with branches in ten countries of the region).

### National initiatives

There is a second level of experiences linked to the resolution of conflicts. At this level are civil society organizations that have developed a series of programs and interventions with the objective of promoting peace, avoiding violent escalations, and contributing to a peaceful solution to conflicts. Generally, these entities work strongly with base organizations. To illustrate the characteristics of these organizations we can mention:

**THE CENTRO DE INVESTIGACIÓN AND PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, CIPRODEH. (CENTER FOR RESEARCH AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS)**, is a non-profit, nongovernmental organization recognized by the state of Honduras. The organization is dedicated to education, promotion, and research in favor of the protection of human rights and their inclusion in public policies in Honduras. CIPRODEH is a local entity characterized by its promotion of the efficacy of individual and collective human rights, which is seen as a condition for an effective citizenship. This institutional characteristic has allowed CIPRODEH to be an organization that supports local and national processes of democratization and is oriented towards dismantling authoritarian structures and inequalities of power; this includes, without a doubt, more effective participation of the citizenry in public affairs. The organization has four work areas or programs: program for the strengthening of justice; program for the development of vulnerable populations; program of citizen participation; and program of institutional strengthening. It is a small organization with an eleven person staff and a network of volunteers throughout the country.

**THE CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES AND SOCIALES, CELS (CENTER OF LEGAL AND SOCIAL STUDIES)**, is a nongovernmental organization, founded in Argentina in 1979, engaged in the promotion and protection of human rights and the strengthening of the democratic system and the rule of law in Argentina. The CELS is formed of a multidisciplinary, pluralist work team that conceives of human rights as those rights recognized in the Universal Declaration of the United Nations and in international law, with the state bearing responsibility for their respect or violation. Upon this basis, fundamentally via litigation in judicial cases, the CELS works to denounce human rights violations, to impact upon the formulation of public policies based on respect for fundamental rights, and to promote greater exercise of these rights by the most vulnerable sectors of society. The CELS works to advance and monitor in diverse areas such as human rights violations under dictatorship and democracy; institutional violence and citizen security; cultural, social and economic rights; tolerance and non-discrimination; access to information, and liberty of expression, among other themes.

**THE INSTITUTE OF LEGAL DEFENSE, IDL**, of Peru, is a non-profit human rights organization whose fundamental objective is to advance human rights in Peru and to make a significant contribution to the success of the democratic transition by providing structured and efficient support from a civil society organization with an important presence in national life. Its principal thematic concerns are peace, truth, justice, reparations and reconciliation, judicial reform, the role of the armed forces and civil-military relations, citizen security, public order and policing, freedom of the press and access to information,

mechanisms of citizen participation and oversight of public affairs, the struggle against discrimination with an emphasis on the role of women in public life and historical exclusions for reasons of cultural and racial identity, and the fight against corruption. They develop activities at the national level and possess an extensive communications program to disseminate their activities.

**THE PEACE AND AND JUSTICE SERVICE, SERPAJ**, is a nongovernmental organization founded in 1981. The National Secretariat in Uruguay is composed of SERPAJ-Latin America and has consultative status with the United Nations (ECOSOC-UNESCO). Defined by its Latin American essence, its humanist, ecumenical, and Christian inspiration, the work of SERPAJ rests upon three pillars: the mystique and practice of peaceful struggle, the participation in the construction of a society that goes beyond domination, and respect for the rights of individuals and peoples. In Argentina, for example, SERPAJ works with street kids, attempting to generate mechanisms of mediation between the police and the children to prevent police violence against them.

**VIVA RÍO (LONG LIVE RIO)** in Brazil is considered a successful experience in preventing urban violence in Latin America and the Caribbean (see Box 7). Viva Río is an organization that in addition to employing about a one thousand workers possesses a broad network of volunteers that address different aspect of violence, including factors related to culture, institutions, communications media, and the international situation. Its success has been internationally recognized and presently the organization is in the process of sharing its work experiences with other Latin American networks and centers.

**Box 7**

**A successful experience of civil action in an area of urban violence**

Rio de Janeiro is one of the most violent cities in Brazil, a situation which is associated with high levels of poverty, inequality, drug trafficking, and corruption. VIVA Rio arose amidst the urban crisis that appeared at the beginning of the 1990s. A nongovernmental organization, VIVA Rio has designed alternative strategies of social integration and urban violence reduction. A group of activists involved in campaigns to end violence in the city created VIVA Rio. Before a considerable escalation of violence between the police and drug-trafficking organizations and among drug traffickers themselves, VIVA Rio proposed policies to build social capital and to reformulate police techniques in the most conflictive areas of the city. Backed by sociological and anthropological research, VIVA Rio's proposals were based upon an epidemiological study of the violence which identified its principal vector as well as the risk group most effected by the violence.

The principal vector was identified as access to and possession of firearms, while the group most effected by violence, both as victim and as victimizer, was identified as males between the ages of fifteen and twenty-nine who had dropped out of primary school. This factor is very important given that of social integration possession of a basic education certificate is fundamental for obtaining legitimate employment in Brazil. This group forms the recruitment pool for drug traffickers and is the segment towards which VIVA Rio directs its preventive activities in the favelas. These activities include educational programs, the formation of social capital (micro-credit for endeavors that generate employment), and programs of community policing and micro-disarmament.

The success of VIVA Rio has won the group national and international recognition. It has over one thousand functionaries, a budget which reached six million dollars in 2002, and enjoys the support of the communications media, firms, and international foundations. Since the mid-1990s, VIVA Rio has been engaged in a dialogue with the government of the State of Rio de Janeiro. The authorities have listened to, assimilated, and helped implement this organization's alternative proposals for public security.

The program Police Group for Special Areas (GPAE), proposed by VIVA Rio and developed in conjunction with the state government, has managed to lower to zero the number of homicides registered in a particularly violent favela located between Ipanema and Copacabana, in the heart of tourism in the city. The novelty consisted of taking the police into the favela so that they could provide "public security" to its inhabitants, who prior to this program had been denied this service which meant that the spaces abandoned by the state had been occupied by drug traffickers.

The police presence also provides security for programs that benefit the community such as day care centers and educational and cultural centers. In a sense, VIVA Rio develops a strategy of "alternative urban development" that has begun to be applied by the government in other favelas in the city.

**Box 8**

**Intervention of the Minister of Defense of Chile Michelle Bachelet in the closing ceremony of the International Conference**

The Chilean Minister of Defense, Michelle Bachelet, maintained that one of the central challenges for public authorities in the XXI century is to insert new actors in the decision making processes concerning matters of public interest, thereby initiating a debate among civil society, public functionaries and international organizations. She added that the changes that are presently taking place in the international system make such a debate particularly necessary given the presence of global threats and the need for the collaboration of all of society.

She also maintained that to confront the new themes on the security agenda there must exist certain organizing principles. According to her, the first of these principles is that the United Nations must be the protagonist in resolving international conflicts. The function of this organization is to guarantee international peace and security, which is not a function of the countries individually. Second, international cooperation must be encouraged. Stimulating the process of integration and increasing mutual confidence measures, for example, will create a climate of peace and stability in regions such as Latin America.

Finally, regarding the issue of sovereignty, Minister Bachelet argued that an adequate conjugation between diversity and respect for the reality of each country is necessary; this can only be achieved if we accept international law as the instrument that regulates our relations.

## V. Looking toward the future: civil society, peace and regional crisis

The new international context imposes a series of challenges upon the hemispheric community. In Latin America and the Caribbean the problem isn't so much the "global terrorist threat," as it is the negative consequences that certain policies adopted by the major power may have in a region that is vulnerable. The most obvious risk is the increasing tendency towards the militarization of different conflicts, in particular those related to the fight against drug trafficking. The greater emphasis the United States has placed on using force to resolve problems such as drug trafficking, immigration and international crime are part of this risk.

The areas of concern for the Latin America and the Caribbean countries are themes related development, poverty, social exclusion, and rising levels of urban violence. In some subregions of the continent (the Andean area, Central America, and the Caribbean) the development agenda combines with the conflict associated with drug trafficking. This combination increases the risks of a higher levels of violence in the region.

Civil society may play a central role in the prevention of conflicts by means of promotion, monitoring, and the implementation of specific policies in conjunction with governments and multilateral agencies. Its role may be oriented towards different levels of intervention in the local, national, and multilateral arenas.

Latin America and the Caribbean have a tradition of peaceful resolution of conflicts that may be an excellent point of reference for other regions of the world. The

region's accumulated experience makes it possible to rearticulate notable past experiences and to strengthen existing initiatives. This review requires a great effort of:

- **COORDINATION**, which is today facilitated by low-cost and broadly available technologies.
- **FOCALIZATION**, on certain particularly vulnerable regions and countries in the region.
- **RAISING AWARENESS**, around latent and present conflicts in the region.

### Policy and course of action recommendations

The working groups that participated in the International Conference organized in Santiago, Chile by FLACSO-Chile posed their recommendations around four thematic threads: strengthening networks, monitoring conflicts, courses of action, and the role of the communications media.

### On strengthening networks

**IDENTIFICATION OF NETWORKS.** It is important to carry out a diagnosis and compile registry of networks that are working on security and conflict prevention themes at the regional level. By using the Internet, a site could be established that would not only list organizations that are in some way engaged in activism in the hemisphere but could also be a space for sharing successful experiences of interorganizational work.





**COORDINATION OF NETWORKS.** Greater integration of civil society is needed. This integration can be achieved by trained networks that have concrete strategic plans. Such coordination is difficult but it might be possible to establish strategic priorities or "campaigns" around which some actions may be coordinated. The conflict in Colombia and the situation in some Central American and Caribbean countries (Guatemala, Haiti and Nicaragua) might be points around which to articulate this organized action.

**HUMAN RIGHTS AND PROMOTION OF PEACE.** It is necessary to generate more linkages, exchange experiences, and coordinate among those groups working for the defense of human rights and those associated with the promotion of peace. On the one hand, activism in the realm of human rights might incorporate a greater emphasis on peace, just as peace activism in the region and the world might incorporate the work experience of human rights groups.

**DEVELOPMENT OF EXPERTISE.** It is essential that greater training occur in areas linked to the prevention of conflicts. The final objective is that the work of civil society in specific realms be recognized, that actors recur to civil society as a source of information and analysis, and that these civil society organizations enjoy greater credibility before governments and international actors. Subregional workshops in the countries mentioned might be sponsored. In these workshops the protagonists working on conflict prevention as well as academics and experts might develop new mechanisms and strategies for the prevention of conflicts in specific situations.

**NORTH-SOUTH COOPERATION.** Presently there exists a rich network of relations between civil society organizations based in the United States, Europe and Canada and the countries in conflict (particularly in Colombia and Central America). It appears that the

most fruitful work takes place in networks that address specific themes: arms trafficking in Central America and Brazil, the promotion of peace in Colombia and Central America, support for the displaced in Colombia, etc. There exists an important area of cooperation that could be developed in terms of: (a) monitoring arms transfers from the United States towards Latin America, and (b) monitoring the redesign of policies of military training and cooperation between the United States and Latin America. An effective cooperation between organizations of the northern and southern hemispheres might be organized around specific thematic issues requiring the development of monitoring in both regions. For example, it is necessary to disseminate in Latin America the work of groups that track aid transfers from the United States toward the region. This work might be articulated with thematic campaigns that address the issue of arms build-ups in Latin America.

At the same time, it is necessary to strengthen the relationship that exists among civil society organizations from Latin America and Europe, given that the European audience is particularly sensitive to this region.

**OPENING OF SPACES OF INFLUENCE.** An important arena that should be developed is the incorporation of new civil society groups into the existing spaces for influencing national and international decision making processes. For example, the Organization of American States (OAS) accepts the accreditation of nongovernmental organizations to participate in its periodic assemblies and to have access to information concerning the work developed by the OAS. It is important to broaden these spaces of influence which—although still informal—are useful for articulating citizen demands towards hemispheric institutions.

## On the monitoring of conflicts

**OBSERVATORY OF CONFLICTS.** The participants emphasized the work of academic centers in this area, as well as the need to generate regional conflict observatories and to apply monitoring and evaluation methodologies that permit the development of early warning mechanisms. This task should not be confined to the academy but should have a more general impact in the mass media, government, and governmental agencies.

## On the actions that may be effected

**PROMOTION OF PEACE IN THE REGION.** The conference participants stressed the civil society's role in creating awareness in local regional and international public opinion. The activity presupposes collaborative work among different civil society organizations to obtain timely information.

This objective might be materialized through concrete acts that educate and raise awareness within public opinion about conflicts in the region. For example, the dimensions and gravity of the conflict in Colombia are generally unknown and not debated in the rest of

the hemisphere, except for in those countries directly effected by the conflict or through occasional news pieces informing on the conflict. A traveling educational campaign to promote peace in the region, involving exhibitions, analysis of the drug question, discussion of the conflict, and testimonies might have an important impact in societies that are generally not exposed to this problematic.

## On relations with the communications media

**DIALOGUE WITH THE MEDIA.** It is necessary to establish a dialogue between the communications media and social organizations with the goal of developing joint strategies to design a pro-peace agenda.

**COURSES FOR JOURNALISTS.** One important area to explore is the interaction with journalists on matters of international policy, social conflicts in the region, and conflict resolution. Experiences of academic exchange, graduate courses and diploma programs will open up opportunities to discuss new approaches and visions on conflicts in the region.

## Box 9

## Working groups: summary of the discussion

**GROUP A. PROMOTION OF PEACE AND CIVIL SOCIETY: THE ROLE OF MULTILATERAL AUTHORITIES**

- Participants highlighted the importance of strengthening conflict early warning systems and of consolidating judicial reforms that effectively respond to the population's demands.
- Participants valued the possibility of reinforcing the OAS's capacity to preventively anticipate conflicts, along these lines reinforcing the political potential of the Inter-American Commission on Human Rights;
- Participants agreed on the need to overcome mistrust and resistance in regards to the United States, by exploring novel ways of persuading Congress, the press, and nongovernmental organizations. It was noted that at times one observes a simplistic anti-Americanism devoid of proposals without proposals and that there exists the conviction among many that multilateralism in the region is impossible without the United States.
- There was agreement on the need to recognize that regional authorities are still not capable of recognizing many latent conflicts, generated, for example, by border disputes, that are not addressed within the OAS. It was also noted that there exists a certain lack of solidarity or commitment among countries to address in those forums themes such as Colombia.
- There was agreement that there is a risk that anti-drug programs will be converted into anti-terrorism programs, with a loss of the original meaning of the programs and a disregard for the social variables related with them. Some participants consider that there are no efficient mechanisms for verifying the fulfillment of commitments on anti-drug policies and instruments, while others maintained that they do exist (such as the OAS) but that it is necessary to activate them with more commitment. It was also mentioned that the international norms structuring the United Nations are obsolete and need updating. It was emphasized that military responses to social policies aggravate the conflict.
- There was consensus on the need to observe those factors that shape local conflicts and that may be easily transnationalized, such as drug and arms trafficking, trafficking in human beings, and interests of transnational firms.
- Participants insisted on the need to train foreign ministries on new themes linked to the prevention of conflicts and the construction of peace.
- They also reiterated the urgency of maintaining a "humanitarian minimum" in different conflicts, giving force to the dissemination and analysis of the instruments of international humanitarian law.
- Members of the working group considered that the insertion of themes linked with traditional military security in broader forums on human security, development, and other broader schemes could be an efficient instrument for generating mutual feedback among different perspectives. Also, participants advocated greater diffusion and discussion of the Report of the Panel on United Nations Peace Operations. Also, they considered an authority favorable for the construction of national peace policies and the need for a new look at the role of the armed forces and police.
- They also consider it necessary to highlight that there exist many resources for the prevention and negotiation of conflicts in the international and inter-American systems and that institutionalized mechanisms should not be opposed to ad hoc mechanisms, rather both should be complementary as each has particular roles to fulfill.
- It was recommended that progress be made on incorporating a political component to the Democratic Charter.
- Participants stressed the need to strengthen those circumstances that create beneficial possibilities of integration and to take advantage of them to enrich economic and commercial cooperation with social, political, and peace perspectives.
- They considered it fundamental to differentiate the different phases of conflicts (early warning, prevention, resolution, and termination) and to define the roles in which each actor may be most efficient be they civil society, states, international agencies or inter-American authorities.

**GROUP B. NATIONAL EXPERIENCE PROMOTING A PRO-PEACE AGENDA**

More than being between states, conflicts in the region tend to be of an internal (domestic) character. In this sense, there exists the perception that many of the violent conflicts (organized crime, armed violence, drug trafficking, criminality) have tended to be resolved by way of stern policies rather than the search for alternative solutions. Similarly, some have argued that U.S. foreign policy since 2001 is "militarizing" the resolution of domestic conflicts in Latin America.

National experiences reveal concrete choices in the solution of internal conflicts in which civil society's participation has been fundamental for advancing the objective of arriving at a new notion of security and sustainable democracy. Similarly, the participants note four common points that crisscross the analysis and, therefore, the proposal for overcoming levels of domestic conflict.

#### Common Factors

- The repressive role of states. Asserting the need to maintain order, police excesses in use of force still cannot be controlled. Guatemala was an emblematic case.
- Repression is concentrated among the most pauperized sectors of society. They are those social sectors that have been marginalized by the processes of economic development. This occurs in the Argentine case and to a lesser degree in Guatemala.
- Weak judicial systems or the application of "low-intensity" justice. The non-existence of the rule of law is an impediment against overcoming problems.
- The hypothesis of a militarization of the U.S. agenda towards Latin America is confirmed.

#### Recommendations

- Preponderance of the state and a more active role for it along with greater citizen participation. Without a doubt, the most representative case is VIVA Rio (Rio de Janeiro).
- Preventive models might be advocated to improve the management of the police.
- Combat the roots of violence. To do so strategies of political, economic, and social integration could be improved through greater participation of civil society in the formation of public policies.
- Redefine the role of the police and the participation of the army within states. A move from the traditional conception of security (the national security doctrine) to an alternative security, with a concern for the human being.
- Strengthen the institutionality of states.

#### GROUP C. THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE PROMOTION OF PEACE IN THE REGION

This working group's debate centered on two themes: a) the conceptual definition of civil society and conflict; and b) the generation of an action agenda on the prevention and resolution of conflicts for civil society organizations.

#### Conceptual definitions

In regard to the first point, the group defined civil society as "any organized group belonging neither to the government nor the market, which doesn't seek to govern (political parties are excluded) but tries to impact directly or indirectly upon public policies." They highlighted the heterogeneous composition of the organizations of civil society and social networks, which in many cases have different and, even, opposed strategies, agendas, and objectives.

In relation to the definition of the term conflict, the group noted that they understood conflict as the contraposition of the interests of two or more actors, with some potential for violence, though not exclusively armed violence. They talked of three types of conflict: a) conflicts that are expressed militarily, whether internally or internationally; b) conflicts that are the legacy of civil wars (the Central American case); and c) conflicts that arise in countries that lived through dictatorships.

#### Role of society in the resolution of conflicts and an action agenda

It was emphasized that civil society may play an important role in the prevention of conflicts in terms of the elaboration of early warning diagnoses that make it possible to formulate proposals to avoid an aggravation of conflicts. This framework may have a determinant role by promoting and establishing a dialogue among the different actors involved, placing emphasis on the theme of the structural causes of the conflicts.

Another aspect highlighted concerns the role that society might play in tracking and evaluating the impact of conflicts, as well as promoting mechanisms for their peaceful resolution.

With regards to the action agenda the group highlighted:

- The coordination of networks. A greater integration of civil society through qualified networks bearing concrete strategic plans is necessary. It is also important to carry out a diagnosis and census of networks that are working on themes of security and the prevention of conflicts at the regional level.
- The development of expertise. It is essential to generate better qualified personnel in areas linked to the prevention of conflicts. The ultimate objective is that the work of civil society in specific spheres be recognized, that actors turn to civil society as a source of information and analysis, and that civil society organizations enjoy greater credibility internationally and before governments.
- Observatory of conflicts. Participants emphasized the work of academic centers in this field, as well as the need to create regional observatories of conflicts and to apply tracking and evaluation methodologies that make it possible to generate early warning mechanisms.
- Diffusion and role of the communications media. The working group stressed the role of civil society in terms of creating consciousness in international, regional, and local public opinion. They also stressed the need to establish a dialogue among the communications media and social organizations with the end of designing joint strategies for formulating a pro-peace agenda.

# Conference Program

Thursday, August 28, 2003

09.00 - 10.00

Registration and coffee.

10.00 - 10.45

Opening ceremony.

**Francisco Rojas Aravena**, Director FLACSO – Chile.

**Augusto Varas**, Representative for the Southern Cone and the Andean Region of the Ford Foundation.

**José Miguel Insulza**, Vice President of the Republic of Chile.

10.45 - 11.45

THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW AND MULTILATERAL INSTITUTIONS IN THE REGIONAL CRISES AND U.S. FOREIGN POLICY. VISIONS FROM EUROPE AND THE UNITED STATES.

**Narcís Serra**, former Vice Prime Minister, former Minister of Defense, Spain. Presently, Deputy.

**Gelson Fonseca**, Embassador of Brazil in Chile, former permanent representative of Brazil at the United Nations.

**Anthony Romero**, Executive director of the American Civil Liberties Union (ACLU).

11.45 - 12.15

Debate

\* Moderator: Francisco Rojas A., FLACSO– Chile.

12.15 - 12.30

Coffe

12.30 - 13.10

MULTILATERAL ORGANIZATIONS AND U.S. POLICY.

**John Renninger**, Director of Americas and Europe Division, U.N. Department of Political Affairs.

**Rosario Green**, Ambassador of Mexico in Argentina. Former Assistant Secretary-General for Political Affairs of the United Nations, former Minister of Foreign Relations of Mexico.

13.10 - 13:30

Debate

\* Moderator: Claudio Fuentes , FLACSO – Chile.

13.30 - 15.00

Lunch Torres del Paine Room (G).

15.00 - 16.00

HEMISPHERIC POLICY OF THE UNITED STATES AND REGIONAL CONFLICTS IN LATIN AMERICA: OPPORTUNITIES FOR A PEACEFUL RESOLUTION OF CONFLICTS .

**Pilar Gaitán**, Fundación Ideas para la Paz, (Ideas for Peace Foundation), Colombia.

**Ricardo Córdova**, Dr. Guillermo Manuel Ungo Foundation (FUNDAUNGO), El Salvador.

**Francine Jácome**, Regional Coordinator of Economic and Social Research (CRIES), Venezuela.

16.00 -16.30

Debate

\*Moderator: Paz Milet, FLACSO-Chile

16.30 - 17.00

Coffe

17.00 - 18.00

MULTILATERALISM AND CONFLICT RESOLUTION IN LATIN AMERICA

[Carlos Portales](#), Director of Foreign Policy, Chile.

[Michael Shifter](#), Inter-American Dialogue.

[Francisco Rojas Aravena](#), FLACSO – Chile.

\*Moderator: Diana Tussie

18.00 - 18.30

Debate

\*Moderator: Training Institute for Sustainable Development (IEPADES), Guatemala.

12.00 - 13.00

Plenary Session. Action agenda: discussion of strategies and public and private actions to promote peace in the continent.

\*Moderator: Francisco Rojas Aravena, FLACSO-Chile.

13.00 - 13.30

Closing ceremony.

[Michelle Bachelet](#), Minister of Defense of Chile

### FLACSO Academic Headquarters - Chile

## Friday, August 29, 2003

9.15 - 11.30

Working groups

### GROUP A - TACORA ROOM

Measures to contain polarization and the militarization of conflicts in the region: strengthening multilateral arenas.

\*Moderator: Clovis Brigagao, Adjunct director of the Center for American Studies (CEAs), University Cândido Mendes, UCAM, Rio de Janeiro.

### GROUP B - SIERRA NEVADA I ROOM

Subregional and national experiences in the peaceful resolution of conflicts: a pro-peace agenda.

\*Moderator: Sara Larrain, Executive director, Sustainable Chile Program.

### GROUP C - SIERRA NEVADA II ROOM

The role of civil society in the resolution of regional and extra-regional conflicts.

\*Moderator: Diana Tussie, FLACSO-Argentina.

11.30 - 12.00

Coffe

16.00 - 18.30

Working group and follow-up meeting.

Workshop on follow-up, monitoring, and strategies for disseminating themes related to peace and the peaceful resolution of controversies.

16.00 - 16.30

Introduction:

Claudio Fuentes S. y Francisco Rojas Aravena

16.30 - 17.30

Discussion.

18.15 - 18.30

Closing Ceremony.

# Participants

## ARGENTINA

Andrea Fabiano, Embassy of Argentina  
Carlos Gabetta, Le Monde Diplomatique  
Diana Tussie, Latin American Faculty of the Social Sciences (FLACSO)  
María del Carmen Verdú, Coordinator against Institutional and Police Repression (CORREPI)  
Víctor Abramovich, Center of Legal and Social Studies (CELS)  
Roberto Saba, Association for Civil Rights

## AUSTRIA

Marianne Da Costa, Ambassador of Austria in Colombia

## BRAZIL

Bernardo Sorj, Viva Río  
Clovis Brigagao, Cândido Méndez University  
Gelson Fonseca, Embassy of Brazil in Chile  
Pablo Dreyfus, Viva Río

## COLOMBIA

Dario Villamizar, Means for Peace  
Guillermo Carvajalino, Businessmen for Education Foundation  
Henry Salgado, Center for Research and Popular Education, Colombia (CINEP)  
Ingrid Bolivar, Center for Research and Popular Education - Colombia (CINEP)  
Popular - Colombia (CINEP)  
Pilar Gaitán, Ideas for Peace

Rodrigo Gutiérrez, Ideas for Peace

## COSTA RICA

Ana Yancy Espinoza, Arias Foundation  
Cecilia Cortes, Foundation of Foreign Services for Peace and Democracy (FUNPADEM)  
Luis Emilio Fernández, Embassy of Costa Rica

## DOMINICAN REPUBLIC

Juan Bonnelly, Embassy of the Dominican Republic

## ECUADOR

Adrián Bonilla, Latin American Faculty of the Social Sciences (FLACSO)  
Augusto Saa, Embassy of Ecuador  
Francisco López, Andean Democratic Auditing  
Gonzalo Salvador, Embassy of Ecuador

## EL SALVADOR

Ricardo Córdova, Dr. Guillermo Manuel UNGO Foundation (UNGO)

## GERMANY

Wolf Grabendorf, Friedrich Ebert Stiftung in Colombia (FESCOL)

## GUATEMALA

Carmen Rosa De León, Training Institute for Sustainable Development (IEPADES)

## MEXICO

Gustavo Castro, Center for Economic and Political Research for Community Action (CIEPAC)

Rosario Green, Ambassador of Mexico in Argentina

Ricardo Valero, Ambassador of Mexico in Chile

## MOROCCO

Adelhadi Boucetta, Embassy of Morocco

Bouchra Boudchiche, Embassy of Morocco

## PANAMA

Juan Humberto Chávez, Embassy of Panama

## PERU

Ana María Tamayo, Institute of Legal Defense (IDL)

Ernesto De la Jara, Institute of Legal Defense (IDL)

## SPAIN

Juan Alfonso Ortiz, Embassy of Spain

Narcís Serra, Center of International Relations and International Cooperation (CIDOB)

## UNITED STATES

Anthony Romero, American Civil Liberties Union

José Miguel Vivanco, Human Rights Watch

Joy Olson, Washington Office on Latin America (WOLA)

Michael Shifter, Inter-American Dialogue

Sanho Tree, Inter Press Service (IPS)

Tracy De Wid, Embassy of the United States

James Cypher, California State University

## VENEZUELA

Francine Jacóme, Regional Coordinator of Economic

and Social Research (CRIES)

Gerardo Delgado, Embassy of Venezuela

## CHILE

### a. Nongovernmental organizations

Alejandro Bahamondes, Party of Democracy (PPD)

Alejandro Iturra, Arcis University

Alvaro Pedroza, Alberto Hurtado University

Ana María De la Jara, Chilean Association of Nongovernmental Organizations A.G. (ACCION)

Ana Ortega, Alberto Hurtado University

Angel Manrique, Alberto Hurtado University

Angela Ibarra, Alberto Hurtado University

Angélica Vasquez, SERPAJ

Carlos Delgado, University of California

Carlos Gutiérrez, Arcis University

Cecilia Medina, University of Chile

Cecilia Valdivia, Alberto Hurtado University

Claudia Martínez, Catholic University

Claudio Andrade, Ministry of the Interior

Claudio Pardo, National Television of Chile (TVN)

Diego Iglesias, Chile 21

Esteban Montes, Andrés Bello University

Farith Fraija, Alberto Hurtado University

Felipe González, Diego Portales University

Fernando Kreis, Strategic Alliance

Gonzalo Alvarez, Academy of Christian Humanism

Hector Chamaca, Academy of Christian Humanism

Hernán Rodríguez, University of Chile

Iris Vittini, University of Chile

Ivan Zamora, Chilean Association of Nongovernmental Organizations A.G. (ACCION)

Jacobo Schatan, CENDA

Javier Campos, Alberto Hurtado University

Javier Couso, Diego Portales University





José Martínez, Alberto Hurtado University  
Juan Carlos Aguirre, Academy of Christian Humanism  
Juan Domingo Silva, Arcis University  
Judith Castro, Alberto Hurtado University  
Manuel Baquedano, Popular Education Institute (IEP)  
María Sol Mina, Alberto Hurtado University  
Mario Vargas, Good Morning America  
Marco Fernández, Arcis University  
Marek Hoehn, Academy of Christian Humanism  
Matilde Wolter, EFE Agency  
Mercedes Montoya, SERPAJ  
Nelson Montenegro, ANEPE  
Oscar Gamarra, Alberto Hurtado University  
Ricardo Hormazabal, University of Chile  
Roberto Durán, Catholic University  
Rodrigo Hernández, Alberto Hurtado University  
Rosa Gongora, Alberto Hurtado University  
Sara Larraín, Sustainable Chile  
Victor Finschi, Diego Portales University  
Walter Sánchez, University of Chile  
Walter Krohne, CELAPI

## B. GOVERNMENTAL REPRESENTATIVES

Alejandro Ahumada, Ministry of Foreign Relations  
Renan Fuentealba, Ministry of Defense  
Ignacio Concha, Ministry of Foreign Relations  
Eduardo Ortega, Ministry of Foreign Relations  
Amira Esquivel, Ministry of Foreign Relations

## OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

John Renninger, United Nations Organization (ONU)  
Carmen Artigas, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)  
Luis Yañez, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)  
Roberto Rensi, European Union

## FORD FOUNDATION

Martín Abregu, Andean Region and Southern Cone  
Cristina Eguizabal, Mexico and Central America  
Ana Toni, Brazil  
Augusto Varas, Andean Region and Southern Cone

## FLACSO-CHILE

David Álvarez, Researcher  
Natalia Escobar, Assistant researcher  
Claudia Fuentes, Researcher  
Claudio Fuentes, Academic Coordinator  
Peace Milet, Coordinator Area of International Relations  
Francisco Rojas Aravena, Director  
Anthony Tillett, Visiting Professor  
Luciano Tomassini, Coordinator Public Studies  
Carlos Vergara, Documentalist librarian  
Andrés Villar, Researcher  
Keizer Wilemijn, visitor, University of Leiden, Holland

# Documents

Documents prepared for the Conference (available in Spanish, unless otherwise noted, at <http://www.flacso.cl>)

- Bolívar, Ingrid J. (2003). "The role of civil society in the resolution of conflicts: the ambiguity of the contexts and of the political uses of the invocations." CINER, Colombia.
- Castro, Gustavo (2003). "Petro-militarization of the continent and of America de en medio." Center for Economic and Political Research for Community Action (CIEPAC), México.
- Cortés, Cecilia (2003). "Greater synergies between local and international actors for the containment of conflicts." FUNPADEM, Costa Rica.
- De la Jara, Ernesto (2003). "Commentaries on the questions posed in Group B on the basis of the Peruvian experience." Institute of Legal Defense, Peru.
- De León-Escribano, Carmen Rosa (2003). "Subregional and national experiences in the peaceful resolution of conflicts: Pro-peace agenda." IEPADES, Guatemala.
- Dreyfus, Pablo (2003). "Subregional and national experiences in the peaceful resolution of conflicts: Pro-peace agenda." Viva Río, Brazil.
- Fuentes Saavedra, Claudio (2003). "Three dilemmas in the international system. Terrorism, national sovereignty, and unipolarism." FLACSO, Chile.
- Gaitán, Pilar (2003). "The reconstruction of the state and the role of civil society before the internal conflict in Colombia." Ideas for Peace Foundation, Colombia.
- Grabendorff, Wolf (2003). "Measures to contain polarization and militarization in the region: the role of external actors." FESCOL, Colombia.
- Green, Rosario (2003). "A new Latin American regionalism for an altered multilateral order." Embassy of Mexico in Argentina, Argentina.
- Jácome, Francine (2003). "Governability crisis in Venezuela: possible scenarios." CRIES, Venezuela.
- Jácome, Francine (2003). "The role of civil society in the resolution of conflicts: the ambiguity of the contexts and of the political uses of the invocations." CRIES, Venezuela.
- Jaramillo Edwards, Isabel (2003). "Measures to contain polarization and militarization in the region: the role of external actors." Center of Studies on America. Havana.
- López Bermúdez, Francisco (2003). "Contempt as politics." Andean Democratic Auditing, Ecuador.
- Olson, Joy (2003). "The role of civil society organizations in the U.S. in promoting the peaceful resolution of conflict in Latin America - a Perspective from U.S. Civil Society". In English. Washington Office on Latin America (WOLA), United States.

- Romero, Anthony D. (2003). "The importance of a pro-peace agenda in the Americas." American Civil Liberties Union, United States.
- Salgado, Henry (2003). "Plan Colombia: from the war against drugs to the counterinsurgency struggle." CINEP, Colombia.
- Sánchez, Walter (2003). "The (un) United Nations after the Iraq war." University of Chile, Chile.
- Shifter, Michael (2003). "Measures to contain polarization and militarization in the region: the role of external actors." Inter-American Dialogue, United States.
- Solís, Luis Guillermo (2003). "Hegemonic recomposition in Central America? The regional variables." FUNPADEM, Costa Rica.
- Sorj, Bernardo (2003). "Summary responses." Viva Río, Brazil.
- Tamayo, Ana María (2003). "The role of civil society in the resolution of regional and extra- regional conflicts." Institute of Legal Defense, Peru.
- Verdú, María del Carmen (2003). "Repressive policies of the Argentine state." CORREPI, Argentina.
- Villamizar, Darío (2003). "Civil society and armed conflict in Colombia." Media for peace, Colombia.
- Vivanco, José Miguel (2003). "Global strategy against terrorism." Human Rights Watch, United States.
- Vivanco, José Miguel (2003). "Negotiations with irregular armed groups." Human Rights Watch, United States.
- Yancy Espinoza, Ana (2003). "Civil society, some considerations." Arias Foundation, Costa Rica.

### Other sources consulted (in Spanish unless otherwise noted)

- Center of Legal and Social Studies (CELS). Annual Report on Human rights in Argentina (Various years).
- Fuentes Saavedra, Claudio and Francisco Rojas Aravena. "The backyard. The United States and Latin America post Iraq." Nueva Sociedad, N°185, 2003.
- Fuentes Saavedra, Claudio, Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police Violence in Democratic Argentina and Chile. In English. Ph.D. Thesis. University of North Carolina, Chapel Hill, 2003.
- Kissinger, Henry. Foreign policy and preventive attacks. La Tercera, May 9, 2003.
- Krasevac-Szekely, Kimberly and Luis Gilberto Murillo (2003) "Give Peace a Place: LWE's Initiative to Fit the Pieces Together." In English.
- Rojas Aravena, Francisco. "The policy of the Bush Administration." Foro 21, N°18, October 2002.
- Serra, Narcís. "The United States and the Iraq war." El País, March 2003.
- Small Arms Survey. Spray Bullets: The Impact of Small Misuse in Central America. In English. Occasional paper, Number 5, October 2002.
- Shifter, Michael. "A Policy for the Neighbors." The New York Times, July 18, 2003.
- U.S. National Security Strategy. In English. October 2002.
- U.S. National Strategy for combating terrorism. In English. March 2003.
- World Relief, Lutheran (2003) "Developing a Framework that links Local Peacebuilding to National and International Policymaker." In English.